

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

WT/WGTCP/M/12

8 de noviembre de 2000

(00-4720)

Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre Comercio y Política de Competencia

INFORME DE LA REUNIÓN DE LOS DÍAS 2 Y 3 DE OCTUBRE DE 2000

Nota de la Secretaría

1. La duodécima reunión del Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre Comercio y Política de Competencia se celebró los días 2 y 3 de octubre de 2000, bajo la presidencia del Profesor Frédéric Jenny.

2. Al comienzo de la reunión, el Presidente señaló que, como se había acordado en la reunión informal del Grupo de Trabajo del 27 de marzo de 2000, la finalidad de la reunión era llevar adelante la labor del Grupo de Trabajo de conformidad con lo dispuesto por el Consejo General en su decisión de diciembre de 1998 (WT/GC/M/32, página 56). Esa decisión dice lo siguiente:

"El Consejo General decide que el Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre Comercio y Política de Competencia prosiga la labor educativa que ha emprendido de conformidad con el párrafo 20 de la Declaración Ministerial de Singapur. A la luz del reducido número de reuniones que podrá celebrar en 1999, el Grupo de Trabajo, aunque en cada reunión siga basando su labor en el estudio de las cuestiones planteadas por los Miembros en relación con la interacción entre el comercio y la política de competencia, incluidas las prácticas anticompetitivas, mantendrá un debate centrado sobre: i) la pertinencia de los principios fundamentales de la OMC de trato nacional, transparencia y trato de la nación más favorecida con respecto a la política de competencia y viceversa; ii) posibles enfoques para promover la cooperación y la comunicación entre los miembros, incluso en la esfera de la cooperación técnica; y iii) la contribución de la política de competencia al logro de los objetivos de la OMC, incluida la promoción del comercio internacional. El Grupo de Trabajo seguirá asegurándose de que se tengan plenamente en cuenta la dimensión de desarrollo y la relación con las inversiones. Queda entendido que esta decisión se adopta sin perjuicio de cualquier futura decisión que pueda adoptar el Consejo General, incluso en el contexto de su actual programa de trabajo."

3. Sobre la base del criterio utilizado por el Grupo en su reunión anterior y en sus reuniones de 1999, el Presidente sugirió que el Grupo organizara su labor durante la presente reunión de la siguiente manera:

- tratar, en primer lugar, la cuestión de la pertinencia de los principios fundamentales de la OMC de trato nacional, transparencia y trato de la nación más favorecida con respecto a la política de competencia y viceversa;
- examinar luego posibles enfoques para promover la cooperación y la comunicación entre los Miembros, incluida la cooperación técnica;
- examinar seguidamente la contribución de la política de competencia al logro de los objetivos de la OMC, incluida la promoción del comercio internacional;

- examinar, por último, otras cuestiones que los Miembros deseen plantear y que estén comprendidas en el mandato del Grupo de estudiar la interacción entre el comercio y la política de competencia.

El Presidente puso de relieve también la orientación proporcionada en la decisión del Consejo General mencionada más arriba de que el Grupo de Trabajo debe asegurar que se tengan plenamente en cuenta la dimensión de desarrollo y la relación con las inversiones. Pareciera que esto debería hacerse con cada uno de los cuatro elementos de trabajo mencionados más arriba.

I. LA PERTINENCIA DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA OMC DE TRATO NACIONAL, TRANSPARENCIA Y TRATO DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA CON RESPECTO A LA POLÍTICA DE COMPETENCIA Y VICEVERSA

4. No se recibieron contribuciones ni se formularon declaraciones en relación con este tema.

II. POSIBLES ENFOQUES PARA PROMOVER LA COOPERACIÓN Y LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS, INCLUSO EN LA ESFERA DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA

5. Los representantes del Japón (dos contribuciones), Suiza, la Comunidad Europea y sus Estados miembros, Corea, el Canadá y Tailandia presentaron contribuciones escritas sobre este tema del programa (documentos WT/WGTCP/W/156 y 157; WT/WGTCP/W/151; WT/WGTCP/W/152; WT/WGTCP/W/154; WT/WGTCP/W/155; y WT/WGTCP/W/150, respectivamente). Además, el representante de Croacia presentó un documento no oficial (que se distribuirá con la signatura WT/WGTCP/W/158) y los representantes de la UNCTAD y de la OCDE proporcionaron actualizaciones sobre actividades pertinentes de sus organizaciones. Los representantes de Australia; el Canadá; la Comunidad Europea y sus Estados miembros; Corea; Filipinas; Hong Kong; China; Hungría; la India; Indonesia; el Japón; Kenya; Malasia; Noruega; el Pakistán; Suiza; Trinidad y Tabago; y Túnez hicieron declaraciones orales o formularon preguntas o respondieron a ellas.

6. El representante del Japón, al presentar el documento WT/WGTCP/W/156, dijo que, al reducirse los obstáculos al comercio y seguir universalizándose las economías, era preciso abordar no sólo las prácticas anticompetitivas que tienen lugar dentro del territorio de determinados países, sino también prácticas anticompetitivas que tienen una dimensión internacional. La cooperación entre los organismos nacionales encargados de la competencia era fundamental para hacer frente a ese problema. Si bien existía ya una importante cooperación internacional en materia de política sobre la competencia a través de acuerdos bilaterales y regionales, un marco multilateral sobre la política de competencia apoyaría los esfuerzos de los Miembros de la OMC para desarrollar sus regímenes en materia de competencia y acelerar la cooperación para una mejor aplicación de las normas sobre la competencia. En algunos aspectos podría haber beneficios que sólo podrían obtenerse mediante un marco multilateral. La delegación del orador estimaba que, mediante las deliberaciones del Grupo de Trabajo, había comenzado a surgir un consenso acerca de algunos elementos básicos de un marco multilateral sobre política de competencia, que comprendía por lo menos tres elementos: i) la comunicación de informaciones y experiencias respecto de las leyes nacionales en materia de competencia y las políticas y prácticas para su aplicación; ii) la prestación de asistencia técnica; y iii) medidas para facilitar la coordinación de políticas e iniciativas para la aplicación de las normas, incluyendo las notificaciones voluntarias. El primer elemento crearía valiosas oportunidades para mejorar los regímenes nacionales en materia de competencia mediante la difusión de las prácticas óptimas. Con respecto al segundo elemento, los beneficios derivados de la prestación de asistencia técnica no se limitaban a la ayuda a los países en desarrollo para crear regímenes adecuados sobre competencia; en realidad, la asistencia técnica podría preparar el camino para una cooperación internacional más estrecha sobre cuestiones referentes a la competencia con los países participantes.

Respecto de las medidas para facilitar la coordinación, podrían incluir el intercambio de informaciones generales sobre la política y los procedimientos de aplicación de las normas e informaciones concretas sobre casos en curso de investigación, y permitiría a los Miembros participantes entablar consultas y, eventualmente, coordinar soluciones sobre la base del acuerdo mutuo.

7. A juicio de la delegación del Japón, los principios de transparencia y no discriminación eran un requisito indispensable tanto de la política comercial como de la política de competencia y, por esta razón, esos principios deberían incorporarse también en un marco multilateral sobre la competencia. Además, la prohibición de las prácticas consideradas anticompetitivas en sí mismas, especialmente los cárteles intrínsecamente nocivos, podría formar parte de un marco que también comprendiera normas sobre procedimientos de investigación basados en los principios de transparencia y no discriminación. Las obligaciones concretas a este respecto podrían incluir la observancia del "debido proceso", la protección de la oportunidad de ser oído, la protección de la información confidencial y las medidas de reparación suficientes. Un marco multilateral debería ser suficientemente flexible para tener en cuenta las diferencias de nivel de desarrollo entre los regímenes nacionales en materia de competencia, el peso asignado a determinadas políticas de desarrollo, y las condiciones económicas y sociales pertinentes.

8. El orador sugirió, a continuación, que un marco multilateral sería de particular utilidad para ayudar a los Miembros a abordar diversos problemas concretos que actualmente eran objeto de discusión o merecían atención por otros motivos. Dos de esos temas eran los siguientes: i) el problema de la jurisdicción concurrente y la falta de armonización de los procedimientos en el examen de las fusiones con consecuencias internacionales, que imponía importantes costos administrativos y algunas veces daba lugar a que se desistiera de fusiones que podían ser beneficiosas; y ii) los cárteles de exportación. Como estos últimos constituían claramente una distorsión del comercio internacional, parecerían quedar claramente comprendidos en el mandato de la OMC. Otros temas que merecían consideración eran el manejo de la información confidencial; la forma de abordar las violaciones de los acuerdos propuestos; y la función que podrían desempeñar en un marco multilateral los compromisos de aplicación gradual, como los establecidos en el AGCS.

9. El representante de Suiza, al presentar el documento WT/WGTCP/W/151, dijo que se habían expuesto diversos argumentos en apoyo de una mayor cooperación en la lucha contra las prácticas anticompetitivas, incluso en el plano multilateral. En primer lugar, existía una asimetría entre las actividades y el poder ejercido por las empresas y el alcance de la legislación nacional en materia de competencia; esto preocupaba especialmente a los países pequeños con limitado poder de negociación. Si las autoridades nacionales actuaran en forma coordinada, quedarían en una posición mucho más fuerte para hacer frente a los comportamientos anticompetitivos de carácter internacional. Además, en consonancia con las exhortaciones hechas en favor de una deliberación más concreta en el Grupo de Trabajo, era importante considerar las consecuencias de la aplicación de las distintas posibilidades concretas en materia de cooperación. Con ese fin, el documento presentado por la delegación de Suiza examinaba aspectos concretos de un posible acuerdo multilateral sobre temas referentes a la competencia, entre ellos los siguientes: i) la prohibición de los cárteles intrínsecamente nocivos (sin que ello significara, sin embargo, que los regímenes nacionales sobre la competencia debieran limitarse a controlar los cárteles intrínsecamente nocivos; correspondería a cada Miembro decidir si habrían de tratarse también, o no, otros tipos de conducta anticompetitiva); ii) las modalidades de cooperación entre los Miembros, incluida la designación de un "centro de información nacional"; y iii) la aplicación de los principios de transparencia y no discriminación de la OMC a los regímenes nacionales en materia de competencia. El orador sugirió que podría ser conveniente para el Grupo de Trabajo que la Secretaría preparase un documento en que se estudiaran más detalladamente las posibles consecuencias de la aplicación de los principios de la OMC en el contexto de la política sobre competencia.

10. El representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, al presentar el documento WT/WGTCP/W/152, dijo que el documento tenía por objeto facilitar el examen más concreto de los eventuales elementos de un acuerdo multilateral sobre la competencia. No tenía por objeto, en cambio, prejuzgar sobre la cuestión de si debían o no iniciarse negociaciones sobre ese tema, y en qué momento; esa cuestión era un punto de naturaleza política que debería resolverse fuera del Grupo de Trabajo. En la primera parte del documento se examinaban los principales argumentos en apoyo de un acuerdo multilateral sobre la competencia. El punto de partida de esos argumentos era el reconocimiento de que, en una economía mundializada, las prácticas anticompetitivas tenían un carácter cada vez más internacional. Esas prácticas, que comprendían los cárteles internacionales, los cárteles de exportación, los cárteles de importación y los abusos de la posición dominante de empresas transnacionales extranjeras, podían tener claramente consecuencias negativas en el comercio internacional, incluso -y no exclusivamente- efectos en el acceso a los mercados. Tales prácticas sólo podrían tratarse con eficacia aunando la aplicación de leyes nacionales sobre la competencia con una cooperación internacional eficaz. Cabía sostener que la necesidad de esa cooperación era mucho mayor en el caso de los pequeños países y los países en desarrollo. La delegación del orador estimaba que, aunque la cooperación de carácter bilateral o regional podía sin duda ser útil, hacía falta que la cooperación tuviera un aspecto multilateral porque las prácticas en cuestión muchas veces iban más allá de los territorios abarcados por los acuerdos bilaterales y regionales y, de cualquier modo, un acuerdo multilateral podría contribuir al impulso y la importancia de la lucha contra las prácticas señaladas, que tenían claros efectos negativos tanto en el comercio como en las perspectivas de desarrollo de los Miembros. Con respecto a la función general de la política sobre la competencia en el desarrollo económico y la necesidad de cooperación para prestar asistencia a los países en desarrollo en relación con los efectos de las prácticas anticompetitivas, el orador hizo referencia a una mesa redonda sobre la legislación y la política sobre competencia organizada en julio de 2000 por el Secretario de Estado para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (de cuyo informe resumido se distribuyeron ejemplares en el Grupo de Trabajo).

11. El orador dijo a continuación que la segunda parte del documento de su delegación analizaba tres posibles elementos concretos de un acuerdo multilateral de la política de competencia, a saber: i) los principios básicos del derecho y la política en materia de competencia; ii) las modalidades de cooperación; y iii) medidas concretas de apoyo a los regímenes de competencia de los países en desarrollo. Con respecto al primer elemento, desde el punto de vista de su delegación, el objetivo de un acuerdo multilateral sobre la competencia no era armonizar los regímenes nacionales en la materia, sino promover la cooperación internacional para poner bajo control las prácticas anticompetitivas internacionales y hacerlo sobre la base de criterios comunes acerca de tales prácticas. Reconociendo este hecho, su delegación preveía el empleo de principios básicos que incluirían un grado importante de progresividad y flexibilidad, más que normas rígidas, como elementos constitutivos de un marco multilateral. Era evidente, sin embargo, que aunque existía una diversidad considerable entre los regímenes nacionales en materia de competencia, también había un amplio consenso en que los cárteles intrínsecamente nocivos planteaban un problema fundamental a la política sobre competencia. En consecuencia, la prohibición de esos cárteles, así como los elementos relativos a la transparencia y la aplicación no discriminatoria de las normas sobre la competencia debían considerarse principios básicos que correspondía incorporar en un marco multilateral. No obstante, la prescripción de aplicar el derecho sobre la competencia en forma no discriminatoria no eliminaría la posibilidad de considerar la exclusión de ciertos sectores sensibles del ámbito de aplicación de esas normas. Con respecto al segundo elemento, en un acuerdo multilateral sobre la competencia la cooperación podría tener como mínimo cuatro aspectos: i) la cooperación en casos determinados; ii) el intercambio de experiencias a través de un foro multilateral; iii) la coordinación en el suministro de asistencia técnica general; y iv) la asistencia a países en desarrollo en materia de aplicación de las normas. Estos aspectos de la cooperación darían lugar a diversos beneficios. La cooperación en casos determinados supondría, en lo fundamental, un compromiso de los países de intercambiar informaciones no confidenciales relativas al asunto en cuestión, así como la disposición a entablar consultas cuando estuvieran afectados los intereses de otros Miembros de la OMC. También podría ir más allá de estas

hipótesis; por ejemplo, un país en desarrollo que investigara a una transnacional extranjera podría procurar asistencia de las autoridades encargadas de la competencia del país de origen para obtener informaciones pertinentes. Las autoridades encargadas de la competencia de los países en desarrollo también obtendrían grandes beneficios de la participación en un foro multilateral en que se discutieran las experiencias sobre la aplicación del derecho en la materia. Un criterio más amplio y mejor coordinado respecto de la cooperación técnica también favorecería directamente a los países beneficiarios. Por último, como había sugerido el representante de Trinidad y Tabago, aunque la asistencia técnica de carácter general era importante, los países en desarrollo también se beneficiarían, en una etapa posterior, de una asistencia más específica respecto de investigaciones determinadas sobre la competencia.

12. El representante de Corea, al presentar el documento WT/WGTCP/W/154, dijo que el documento partía de la base establecida en el plan en tres etapas presentado en el documento de Hong Kong, China, durante la reunión anterior del Grupo de Trabajo (documento WT/WGTCP/W/141). La delegación del orador estaba de acuerdo con Hong Kong, China, en que los tipos de prácticas anticompetitivas en que tendría que concentrar su atención el Grupo de Trabajo deberían: i) tener efectos negativos importantes y demostrables sobre el comercio internacional y las inversiones; y ii) ser de índole general, en la medida en que afectaran a un gran número representativo de Miembros de la OMC. El Grupo de Trabajo debería concentrar sus deliberaciones en la continuación del análisis que requería ese marco; por ejemplo, en la elaboración de directrices para determinar las cuestiones relativas a la competencia que tienen pertinencia directa para el comercio internacional y el estudio de las posibilidades multilaterales viables, teniendo en cuenta debidamente la diversidad existente entre los Miembros en su nivel de desarrollo económico y entre sus regímenes nacionales sobre la competencia. Así, el Grupo de Trabajo debería esforzarse por conciliar las prácticas establecidas de los países adelantados, resultantes de prolongados antecedentes sobre aplicación de la legislación en materia de competencia, con criterios más nuevos, necesarios para atender las necesidades específicas de los países en desarrollo. La delegación del orador estimaba que la OMC era el mejor ámbito disponible para abordar problemas de la competencia que tenían gran pertinencia para el comercio internacional y el logro de los objetivos de la OMC. Con respecto a los tipos de posibilidades multilaterales que deberían procurarse, si bien podrían lograrse progresos en la solución de los problemas internacionales relativos a la competencia a través de la asistencia técnica, el fomento de la capacidad y la creación de un mecanismo de examen de la política en materia de competencia, un marco multilateral sobre la política de competencia era más firme y sería preciso organizarlo para complementar esas iniciativas. En opinión de la delegación del orador, también era preciso examinar la reforma de las actuales normas de la OMC, como las incorporadas en el Acuerdo Antidumping, con vistas a hacerlas más compatibles con la promoción de la competencia.

13. El representante del Canadá, al presentar el documento WT/WGTCP/W/155, dijo que se refería a una de las principales cuestiones que el Grupo de Trabajo tenía ante sí respecto de un eventual marco multilateral sobre política de competencia: la naturaleza de las disposiciones que tal marco habría de incorporar en materia de cooperación internacional, a la luz de la experiencia concreta del Canadá en esa materia. A juicio de su delegación, era preciso trazar una distinción entre la cooperación y la asistencia técnica. Mientras que la segunda suponía la prestación de asesoramiento a los países respecto de la formulación o la aplicación de leyes sobre la competencia, o el fortalecimiento de la capacidad institucional respectiva, la primera se refería a cuestiones concretas de interés común derivadas de la aplicación del derecho sobre la competencia. Sin embargo, era evidente que ambas cuestiones se superponían hasta determinado punto. La cooperación era el instrumento ideal para tratar los problemas derivados de la jurisdicción concurrente de dos o más autoridades encargadas de la competencia respecto de una misma actividad u operación. La cooperación también era un instrumento esencial para tratar con eficacia los cárteles internacionales y las alianzas entre empresas. La cooperación podía llevarse a cabo en diversos planos y en diferentes formas. Podía ser tan sencilla como el intercambio y difusión de informaciones básicas no confidenciales, como las leyes y las directrices sobre su aplicación. Incluso en ese nivel básico la

cooperación facilitaba el desarrollo de vías de comunicación útiles entre las autoridades nacionales encargadas de la competencia, que podía generar una dinámica de interés común. La cooperación también podía extenderse a la asistencia mutua en la investigación de determinados casos de prácticas anticompetitivas, como los cárteles intrínsecamente nocivos. La cooperación podía efectuarse en diversos contextos. Por ejemplo, los acuerdos correspondientes podían celebrarse entre Estados o entre organismos. La cooperación también podía efectuarse en el plano multilateral. Por ejemplo, el Canadá observó dos recomendaciones de la OCDE en materia de política de competencia: la Recomendación sobre Cooperación de 1995 y la Recomendación de 1998 sobre los Cárteles Intrínsecamente Nocivos. Una ventaja de este tipo de cooperación era que promovía la adopción de "prácticas óptimas" que, a su vez, acentuaban a largo plazo las perspectivas de una convergencia de criterios, o "armonización suave".

14. El orador sugirió a continuación que la red cada vez más amplia de acuerdos bilaterales sobre política de competencia constituía una prueba palpable del valor de la cooperación en un mercado mundial unificado. Su delegación creía necesario un plan más ambicioso de cooperación para alcanzar una verdadera eficacia en la aplicación de las normas sobre la competencia. Los compromisos en materia de competencia en el contexto de un acuerdo marco de la OMC sobre política de competencia facilitarían la cohesión y la estabilidad necesarias para crear relaciones internacionales antimonopolísticas cada vez más profundas. Era importante señalar que un acuerdo multilateral no interferiría con la cooperación permanente desarrollada en casos concretos mediante acuerdos bilaterales, sino que complementaría ese tipo de cooperación. Otro aspecto importante era que la diversidad de las estructuras y los criterios jurídicos y económicos sobre la política en materia de competencia no excluía ni repercutía negativamente en las posibilidades de cooperación de los países. Un aspecto central de los esfuerzos del Canadá para desarrollar la cooperación en esta esfera había sido la promoción de un nivel mínimo de compatibilidad internacional en la aplicación de las normas sobre competencia, sin comprometer la jurisdicción fundamental del país sobre las conductas que afectaran a su propio territorio. También la colaboración en el ámbito de la OMC tendría en su médula un tema similar. La delegación del Canadá consideraba que este tipo de cooperación era de naturaleza gradual y debía alcanzarse paso a paso. La primera etapa de esa labor sería en gran medida educativa, concentrada en el desarrollo de la capacidad de aplicación de las normas. La segunda etapa tendría como característica primordial el desarrollo y la puesta en práctica de procedimientos de notificación. Un Miembro que emprendiera una investigación que pudiese afectar a intereses importantes de otro Miembro debería notificar a este último en una etapa adecuada de la investigación. Otras etapas más significativas encaminadas al fortalecimiento de la cooperación internacional serían la coordinación de las medidas de aplicación de las normas contra los cárteles internacionales y el desarrollo de un criterio común respecto de cuestiones de procedimiento en el examen de las fusiones. Esta última medida tendría por objeto reducir al mínimo los costos de transacción de la revisión de los planes de fusión en las distintas jurisdicciones. Por último, la delegación del Canadá estimaba que la cooperación alcanzaría sus resultados más favorables si era voluntaria. En consecuencia, un mecanismo de cooperación que formara parte de un acuerdo multilateral sobre la política de competencia no debería ser contrario a la esencia misma de una cooperación significativa y debería preservar la facultad discrecional de los Miembros para actuar. En cualquier caso, a la luz del carácter independiente de las autoridades encargadas de la competencia y de la índole discrecional de sus funciones, resultaría difícil, si no imposible, hacer obligatoria la cooperación.

15. El representante del Japón, al presentar el documento WT/WGTCP/W/157, recordó que en la última reunión del Grupo Especial algunos Miembros habían manifestado la opinión de que, históricamente, el acelerado crecimiento de la economía del Japón se había visto facilitado por la subordinación de la política de competencia a la política industrial. El segundo documento preparado por la delegación del Japón demostraba que no había ocurrido así; la política industrial y la política de competencia habían desempeñado funciones convergentes en el desarrollo económico del Japón. Durante el período de posguerra se habían desarrollado numerosas industrias nuevas, desde las

máquinas de coser hasta las máquinas herramientas, pero esas industrias florecieron principalmente como consecuencia de iniciativas privadas y sin asistencia de ninguna medida especial de preferencia. En el documento se analizaban dos ejemplos de determinados sectores, la industria petroquímica y la del automóvil, en que la intensa competencia había sido un factor esencial que impulsó el crecimiento económico, independientemente del papel desempeñado por la política de desarrollo industrial. Con respecto al sector de la industria petroquímica, como la producción eficiente de ese sector exigía importantes economías de escala, el Ministerio de Comercio Exterior e Industria del Japón había promovido la consolidación de los productores de etileno en unidades suficientemente amplias exigiendo determinados niveles mínimos de producción. A juicio del Ministerio, la consolidación había resultado útil, no sólo para lograr la eficiencia, sino también para atenuar los efectos de las coyunturas desfavorables del mercado. Sin embargo, no se habían impuesto límites al número de empresas que podrían participar en el sector alcanzando los niveles de producción mínimos. En consecuencia, el número de productores de etileno casi se duplicó en pocos años, determinando una fuerte disminución de los precios internos. Esa disminución intensificó la demanda interna de etileno y el mercado registró un auge que, a su vez, atrajo a nuevos productores. La conclusión evidente era que la industria del etileno había crecido por efecto de la competencia entre numerosos participantes en el mercado. En el caso de la industria del automóvil, *Honda Motor Company* se había negado a seguir una recomendación gubernamental de no entrar en la industria automovilística y se convirtió en breve plazo en el principal productor. Otras empresas siguieron el ejemplo de Honda y por último hubo en el mercado del automóvil nueve empresas que rivalizaban entre sí. En realidad, la política industrial del Japón había procurado facilitar la competencia intensificando la competitividad de las empresas, por ejemplo, mediante el desarrollo de planes de asistencia en la esfera de la investigación y desarrollo (I + D). Aunque los progresos tecnológicos habían desempeñado una función de enorme importancia en el crecimiento de la economía del Japón después de la guerra, incluso en lo que respecta a los esfuerzos de I + D el sector privado había tomado la vanguardia y el Gobierno cumplía una función complementaria. La política de competencia del Japón tampoco había dado lugar a la restricción de la competencia. En determinadas oportunidades se autorizaron cárteles contra la recesión para contrarrestar los efectos de fuertes depresiones de la demanda en ciertos mercados, que podrían haber desencadenado quiebras de empresas en cadena; pero esas autorizaciones se habían incorporado claramente en la legislación antimonopolística del Japón y eran objeto de condiciones rigurosas. Lo mismo se aplicaba a otras exenciones de la legislación antimonopolística que se referían, por ejemplo, a determinadas medidas concertadas de pequeñas empresas para ajustarse a coyunturas económicas desfavorables de corto plazo. Salvo en estas situaciones claramente definidas, la legislación antimonopolística del Japón siempre se había aplicado con pleno vigor. Por ejemplo, en 1969 las dos principales acerías japonesas se habían fusionado. Antes de la fusión, el plan respectivo fue examinado por la Comisión de Comercio Leal del Japón. Desde el punto de vista de la política industrial, podría haberse sostenido que esa fusión favorecía el firme desarrollo de la industria del acero del Japón. Sin embargo, la Comisión de Comercio Leal llegó a la conclusión de que esa fusión podría restringir la efectiva competencia y, sobre esa base, condicionó la aprobación de la fusión a diversas desinversiones. Por ejemplo, la fabricación de vías de ferrocarril, que de lo contrario se habría convertido en un monopolio, fue separada y vendida a empresas competidoras. En síntesis, una característica destacada del crecimiento económico de posguerra del Japón había sido la intensidad misma de la competencia en los respectivos mercados. El Gobierno del Japón había contribuido a intensificar la rivalidad entre las empresas creando mecanismos de mercado con efectos positivos en ese sentido. La experiencia del Japón indicaba la importancia de introducir la política de competencia en una etapa precoz del desarrollo, aunque también podían emplearse al mismo tiempo medidas adecuadas de desarrollo industrial para impulsar el crecimiento económico. En la economía mundial liberalizada de hoy, la introducción de una política de competencia por los países en desarrollo parecía aún más urgente. El número cada vez mayor de fusiones entre empresas transnacionales y de casos de cárteles y otras prácticas anticompetitivas con dimensiones internacionales podía tener intensas repercusiones negativas para los países en desarrollo. En consecuencia, el establecimiento de un régimen sobre la competencia era actualmente una tarea fundamental para los países en desarrollo que procuraran lograr una economía de mercado dinámica.

16. La representante de Tailandia, al presentar el documento WT/WGTCP/W/150, dijo que en él se exponía un panorama general de la legislación de Tailandia en materia de competencia, su evolución histórica y las dificultades con que se había tropezado para su aplicación. El desarrollo del régimen de Tailandia sobre la competencia se remontaba a la Ley contra el Acaparamiento de 1947 y la Ley de Fijación de Precios de los Bienes y Servicios de 1979. Como esas leyes no establecieron una protección adecuada del consumidor y las pequeñas empresas frente a las prácticas monopolísticas y las prácticas comerciales restrictivas, fueron reemplazadas en última instancia por la Ley sobre los Precios de los Bienes y Servicios de 1999 y la Ley de Competencia Comercial de 1999. Esta última hacía hincapié en poner coto a las conductas anticompetitivas y, por lo tanto, procuraba uno de los objetivos principales de la modificación constitucional introducida en Tailandia, consistente en apoyar el funcionamiento de una economía de mercado. También complementaba otros instrumentos legales liberales aprobados recientemente por Tailandia, como la Ley sobre las Actividades Económicas Extranjeras y los Códigos Civil y de Comercio. La Ley sobre la Competencia clasificaba los actos anticompetitivos en tres categorías principales: i) el abuso de la posición dominante; ii) las fusiones que dan lugar a monopolios o competencia desleal; y iii) otras prácticas anticompetitivas, como la fijación de precios o la distribución geográfica de los mercados. Se había creado una Comisión de Competencia como órgano de aplicación. Desde la entrada en vigor de la Ley sobre la Competencia, la Comisión de Competencia había recibido dos denuncias y había formulado sus dictámenes. La primera denuncia se refería a un caso de ventas vinculadas, en que un productor de aguardientes en situación dominante condicionaba la venta de ese producto a la venta de cerveza. Como no se habían establecido en el momento de la investigación reglamentaciones que definieran el abuso de la posición dominante, la Comisión no pudo determinar que tal comportamiento fuese ilegal con arreglo al derecho de Tailandia sobre la competencia. Sin embargo, pidió que el productor respectivo pusiera fin a sus prácticas. La segunda denuncia se había referido a una supuesta colusión de dos empresas de televisión por cable. Como esas dos empresas se habían fusionado recientemente, la Comisión había resuelto que se habían convertido posteriormente en una única empresa, lo que excluía la posibilidad de colusión. No obstante, la Comisión pidió que el organismo de reglamentación del sector fiscalizara en el futuro el comportamiento de la empresa respectiva en materia de fijación de precios.

17. La oradora dijo a continuación que su delegación confiaba en que las organizaciones internacionales como la OMC intensificarían sus esfuerzos para dotar a los países en desarrollo de conocimientos de fondo e instrumentos adecuados suficientes para establecer y poner en práctica regímenes eficaces en materia de competencia. Numerosas cuestiones relativas a la posible vinculación entre la política de competencia y los planes y políticas de desarrollo nacional e internacional en vigor requerían una deliberación más completa en el Grupo de Trabajo. Por ejemplo, de qué modo podrían los países en desarrollo tomar parte en el examen de las fusiones de grandes empresas transnacionales que se realizaban fuera de su propio territorio pero que repercutían negativamente en su economía; en qué forma podían los países en desarrollo detectar los cárteles internacionales y tratarlos con eficacia; si esa cuestión podía o no tratarse adecuadamente intensificando la cooperación y coordinación internacionales. Por último, la oradora señala al Grupo de Trabajo un Seminario Regional sobre Política de Competencia organizado por la Secretaría de la OMC en cooperación con los Gobiernos de Tailandia y el Japón y que tuvo lugar en Phuket (Tailandia) en julio de 2000. Asistieron a ese seminario 22 Miembros de la OMC y observadores de Asia Meridional, Sudoriental y Oriental, y se trataron en él múltiples y diversas cuestiones que el Grupo de Trabajo tenía en examen, entre ellas las siguientes: i) la relación entre la política de competencia y el desarrollo económico; ii) los problemas especiales de los organismos encargados de la competencia en los países en desarrollo y la forma en que podría prestarles asistencia la comunidad internacional para resolver esos problemas; iii) las ventajas e inconvenientes de posibles modalidades nuevas de cooperación sobre política de competencia en el plano multilateral; y iv) la naturaleza de un posible marco multilateral sobre la política de competencia. El Seminario no había procurado llegar a ninguna conclusión, sino realizar un planteo completo de los problemas desde todas las

perspectivas del debate. Las actuaciones del Seminario podrían ser de interés para el Grupo de Trabajo (respondiendo a esta sugerencia, la Secretaría distribuyó un informe resumido del Seminario).

18. El representante de Kenya informó al Grupo de Trabajo acerca de hechos recientes ocurridos en materia de política de competencia en la región de África Oriental. Dijo que el 30 de noviembre de 1999 Kenya, Tanzania y Uganda habían firmado el Tratado de la Comunidad de África Oriental (CAO). Tras la ratificación por los tres Estados asociados el Tratado de la CAO entró en vigor el 7 de agosto de 2000. El párrafo i) de su artículo 75 se refería a la legislación y la política en materia de competencia. El Comité Sectorial de Comercio, Industria e Inversiones había recomendado el establecimiento de un régimen común sobre competencia junto con una unión aduanera dentro de un plazo de cuatro años desde la entrada en vigor del Tratado. En un Seminario sobre Legislación y Política de Competencia que se celebró los días 11 y 12 de mayo de 2000 se recomendó el establecimiento de un régimen común sobre competencia separadamente de la unión aduanera. La recomendación fue adoptada por el Comité Sectorial el 15 de septiembre de 2000 y presentada posteriormente al Consejo de Ministros de la CAO, donde se encontraba pendiente de ratificación. Los Estados miembros deberían establecer sus propios regímenes nacionales de competencia para contribuir al establecimiento de un régimen común. La prestación de asistencia técnica era fundamental a ese respecto.

19. La representante de Croacia, al presentar el documento no oficial de su delegación (que se distribuiría con la signatura WT/WGTCP/W/158, con la aprobación del Grupo de Trabajo), dijo que el documento trataba cuestiones relativas al papel de la política de competencia en el desarrollo económico, además de la legislación nacional de Croacia en la materia. Los problemas más importantes que debía tratar una autoridad encargada de la competencia tal vez fueran los siguientes: en primer lugar, asegurar el libre acceso a los mercados reglamentando las condiciones de actuación en el mercado después de la entrada en él; y en segundo lugar, la eliminación o la reducción de cualquier obstáculo privado al mercado. Estas condiciones constituían requisitos indispensables para el desarrollo económico y para lograr la entrada de inversiones extranjeras. Sin embargo, también existían otras condiciones necesarias para el éxito del acceso a los mercados, que ilustraban la contribución que podía hacer la política de competencia al desarrollo. Por ejemplo, desde el punto de vista de Croacia, eran esenciales las actividades de fomento de la competencia y promoción de una cultura de la competencia. Las modificaciones recientes de la Ley de Competencia de Croacia de 1998 habían establecido una fuerte protección del acceso al mercado y se referían a diversos tipos de abuso de la posición dominante o prácticas monopolísticas en el mercado. La aplicación de la legislación y la política sobre la competencia para eliminar obstáculos al acceso al mercado suponía una importante contribución para el logro de condiciones favorables de entrada al mercado, tanto para los proveedores nacionales como para los extranjeros. También eran importantes, respecto de la entrada en el mercado, las condiciones posteriores en él, lo que destacaba la importancia de los compromisos tradicionales sobre trato nacional. En el documento se analizaban diversas cuestiones referentes al comercio y la competencia en bienes y servicios, incluso con referencia a los principios del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. La oradora señaló también algunas cuestiones concretas en relación con nuevos obstáculos a la entrada en el mercado. Por ejemplo, las disposiciones contractuales, como los acuerdos de franquicia comercial, en el sector de los servicios y en las actividades económicas en general, podían crear obstáculos privados al acceso al mercado, y efectivamente los creaban a menudo, tanto para las empresas nacionales como para las extranjeras. La liberalización del sector de los servicios tendría importantes consecuencias en el libre comercio de bienes y las políticas nacionales de protección del consumidor y en los medios empresariales. Los servicios de distribución eran una parte indispensable de las redes a través de las cuales se distribuían los bienes y los servicios en gran escala para asegurar un alto nivel de satisfacción de las necesidades del consumidor a precios moderados. Con respecto al tema de la asistencia técnica, la oradora informó al Grupo de Trabajo de que el organismo de protección de la competencia en el mercado de la República de Croacia, con el fin de mejorar la cooperación internacional en la aplicación y la puesta en práctica de la legislación y la política sobre competencia, había iniciado un proyecto de

intercambio de informaciones con países vecinos. Ese proyecto requería mayores recursos económicos, aspecto que se estaba discutiendo. La medida de la cooperación internacional en materia de mejoramiento de la política de competencia era, tal vez, el aspecto más importante que influía en esa cuestión.

20. El observador de la UNCTAD informó al Grupo de Trabajo de que la semana precedente se había celebrado en Ginebra la Cuarta Conferencia de Examen del Conjunto de principios y normas equitativos convenidos multilateralmente para el control de las prácticas comerciales restrictivas, de las Naciones Unidas. En la preparación de esa Conferencia se organizaron por la secretaría de la UNCTAD cinco seminarios regionales: uno en la India para la región de Asia y el Pacífico; otro en Ucrania para Europa Central y Oriental y los países de la CEI; otro en Marruecos para los países de Oriente Medio; otro en Zambia para los países de África Meridional; y otro en Costa Rica para los países de América Latina y el Caribe. Cada seminario dio lugar a una declaración, que sirvió como contribución a las deliberaciones que condujeron a la resolución general convenida en la Conferencia. En la resolución, la Conferencia reafirmó la fundamental función del derecho y la política de la competencia para un sano desarrollo económico, además de reafirmar la validez del conjunto de principios.¹ Se había dado al conjunto de principios y normas, con fines de referencia, el subtítulo de "Conjunto de Principios y Normas sobre Competencia de las Naciones Unidas". Además, la Conferencia había recomendado que la Asamblea General convocara una quinta conferencia de examen para el año 2005. La resolución pidió que el Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y Política de la Competencia examinara en su próximo período de sesiones los temas de la cooperación sobre el control de fusiones y la relación entre la política de competencia y los derechos de propiedad intelectual. Se pidió que la secretaría de la UNCTAD preparase para el año siguiente un nuevo capítulo de la ley tipo sobre las relaciones entre las autoridades encargadas de la competencia y los organismos de reglamentación, incluidos los reglamentadores sectoriales. La resolución estableció también los grandes lineamientos en que la UNCTAD debería desarrollar sus trabajos futuros en esta esfera, concentrándose en particular en los siguientes temas: i) la creación de capacidades institucionales; ii) la promoción de la competencia; iii) estudios especializados sobre la relación entre la competencia, la competitividad y el desarrollo; y iv) las aportaciones a posibles acuerdos internacionales sobre la competencia, incluso aclarando las formas en que tales acuerdos podrían aplicarse a los países en desarrollo, mediante un trato preferencial o diferencial, y el estudio de las funciones de los mecanismos de mediación en caso de conflicto.

21. La observadora de la OCDE informó al Grupo de Trabajo acerca de un informe publicado recientemente por su Organización sobre el tema de los cárteles intrínsecamente nocivos, en coincidencia con una reunión del Consejo de la OCDE a nivel ministerial.² En el informe se detallaban diversas medidas adoptadas por gobiernos miembros de la OCDE para poner en práctica la Recomendación de la OCDE sobre los Cárteles Intrínsecamente Nocivos, adoptada en 1998. Se proponía en el informe una ampliación de tres años del programa de la Organización contra los cárteles sobre la base de elementos de prueba según los cuales el alcance de los perjuicios causados por los cárteles en los países miembros era considerablemente mayor que el que se les había atribuido anteriormente. También se analizaban en el informe diversos mecanismos útiles de aplicación de las normas para tratar los cárteles, en particular programas de benignidad para los testigos que aportaran datos a las autoridades. La oradora recordó a los delegados que los países no miembros de la OCDE estaban invitados a adherirse a la Recomendación. Informó al Grupo de Trabajo sobre otras diversas

¹ Examen de todos los aspectos del Conjunto de principios y normas equitativos convenidos multilateralmente para el control de las prácticas comerciales restrictivas: Resolución convenida (TD/RBP/CONF.5/L.2, de 29 de septiembre de 2000).

² *Hard Core Cartels: Meeting of the OECD Council at the Ministerial Level, 2000* (París, OCDE, 2000).

actividades de la OCDE en materia de política de competencia y su relación con la política comercial. Hizo referencia a la valiosa colaboración existente entre las Secretarías de la OCDE, la OMC y la UNCTAD.

22. Con respecto a la repercusión de las prácticas anticompetitivas en el comercio internacional y el desarrollo económico, el representante de Hong Kong, China, comentó el documento presentado por la Comunidad Europea y sus Estados miembros (WT/WGTCP/W/152) diciendo que existían tres clases de prácticas anticompetitivas, identificadas en ese documento, que podían frustrar los beneficios del comercio y la liberalización de las inversiones para el desarrollo y el bienestar económico: a) las prácticas que tenían efectos perjudiciales en los mercados de varios países, como los cárteles internacionales, las fusiones anticompetitivas y los abusos de la posición dominante; b) las prácticas que afectaban a las exportaciones en su acceso a los mercados; y c) las prácticas que tenían efectos diferentes en los mercados internos de los países, como las fusiones que tenían efectos benignos en un mercado pero tenían repercusiones negativas en otro. Sin embargo, para la delegación del orador no estaba clara la medida en que esas prácticas tenían efectos significativos y comprobables en el comercio y las inversiones mundiales afectando con carácter general a un número representativo de Miembros de la OMC. En opinión de Hong Kong, China, sólo después de responder satisfactoriamente a esta pregunta podría determinarse si la OMC debía o no adoptar medidas respecto de esas prácticas, y en qué forma.

23. Los representantes de Corea, el Japón, el Canadá, Hungría, la Comunidad Europea y sus Estados miembros y la India dijeron que las prácticas de los tipos que se habían expuesto en los documentos preparados por la Comunidad Europea y sus Estados miembros para la reunión en curso y la anterior (WT/WGTCP/W/140 y WT/WGTCP/W/152), así como en los documentos del Japón (WT/WGTCP/W/156) y Corea (WT/WGTCP/W/154), efectivamente podían tener consecuencias significativas y perjudiciales para el comercio y el desarrollo de los Miembros de la OMC. Los representantes de Corea, el Japón, el Canadá, Hungría, Noruega y la Comunidad Europea y sus Estados miembros dijeron que un marco multilateral sobre política de competencia ayudaría a los países en desarrollo a tratar los efectos perjudiciales de esas prácticas. El representante de Corea señaló, además, que muchos países en desarrollo y con economía en transición habían establecido o fortalecido su política nacional en materia de competencia como medio para consolidar reformas internas y lograr una mejor integración en la economía mundial. Un marco multilateral ayudaría a esos países a estructurar su economía de manera más orientada a la competencia tratando al mismo tiempo de manera más eficaz los intereses contradictorios existentes en el interior de sus países. Por ejemplo, ofrecería una protección mejor contra el dominio de los interesados en el proteccionismo, como los monopolios. El representante de la India dijo que se trataba sin duda de inquietudes válidas, pero no se referían a una lista exhaustiva de los problemas que se planteaban a los países en desarrollo en la esfera de las prácticas anticompetitivas. Por lo tanto, éste era un tema que merecía una atención más detenida del Grupo de Trabajo en su labor futura: es decir, identificar las cuestiones concretas o los aspectos en que los países en desarrollo tropezaban con dificultades. Algunos habían sido señalados en comunicaciones anteriores presentadas por la India, pero era preciso desarrollarlos. No obstante, al reconocer los efectos negativos que las prácticas anticompetitivas podían tener en los países en desarrollo, la delegación de la India no estaba admitiendo que la mejor forma de abordar esos problemas fuese un marco multilateral sobre la política de competencia; acerca de esta cuestión la India extraería sus conclusiones una vez que se hubiera completado el proceso de estudio, y no correspondía prejuzgar al respecto a esta altura.

24. Con respecto a los conflictos que podrían surgir en la aplicación de las leyes nacionales sobre la competencia, el representante de Corea dijo que ciertos casos planteados en el pasado habían ilustrado cómo la aplicación extraterritorial de la legislación sobre la competencia podía llevar a graves conflictos de jurisdicción. La "proyección exterior" jurisdiccional había sido objeto de severas críticas por los países afectados, y varios de ellos habían llegado a recurrir a leyes de represalia y normas de obstrucción para ponerse a resguardo de la extraterritorialidad. Deberían estudiarse medios

que permitieran evitar los conflictos de jurisdicción, incluyendo nuevos instrumentos de cooperación. Un marco multilateral sobre la política de competencia sería útil a este respecto.

25. El representante de Trinidad y Tabago observó que la práctica actual de las autoridades encargadas de la competencia de muchos países consistía en concentrarse en la conducta anticompetitiva que tenía repercusiones en su mercado interno. A ello se debía fundamentalmente que los cárteles de exportación no fueran objeto, por lo general, de disciplinas eficaces en el derecho de la competencia. Con respecto a la pertinencia del concepto de cortesía positiva en este contexto, el representante del Japón dijo que, aun cuando la legislación del país que hubiera recibido la petición no eximiera a esos cárteles, se planteaba el problema de si la autoridad de ese país encargada de la competencia podía tratar asuntos en que el cártel sólo tuviera efectos mínimos en su propio mercado. Por este motivo, el Japón consideraba que el marco multilateral, al tratar los cárteles de exportación, podría lograr un beneficio para la economía mundial que no podría alcanzarse exclusivamente a través de esfuerzos nacionales ni bilaterales.

26. El representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros dijo que, aunque las normas de la Comunidad Europea no eximían, toleraban ni alentaban expresamente los cárteles cuyos efectos se manifestaran únicamente en mercados de exportación, la Comisión carecería de jurisdicción para ocuparse de ellos porque no tenían efectos en el mercado comunitario. Sin embargo, en realidad esa situación no se planteaba con frecuencia. Era más corriente que se encontraran cárteles internos que, paralelamente con mecanismos internos de fijación de precios y distribución del mercado, procuraban cartelizar mercados de exportación. Muchas veces los miembros del cártel eran obligados, durante las investigaciones, a desistir de esas actividades externas porque la Comisión las consideraba formas de apoyo y complementación de prácticas internas ilegales. Una mayor cooperación internacional podría contribuir a un control más eficaz de los miembros del cártel en lo referente a los aspectos exteriores de sus actividades, aunque ello tuviera que llevarse a cabo por un tercer país con jurisdicción primaria sobre esos aspectos externos. También la definición del mercado geográfico respectivo era pertinente a los casos de cárteles mundiales o internacionales. Con la mundialización progresiva de los mercados había dejado de ser evidente la posibilidad de distinguir con claridad entre los efectos en los mercados internos y los efectos en los mercados de exportación. Todas estas situaciones ofrecían un margen para la colaboración con autoridades de otros países en que actuara el cártel. El establecimiento de medios más eficaces para tratar esos casos sería un beneficio importante de las nuevas disposiciones que fomentaran una mayor cooperación en el plano multilateral.

27. Los representantes de Malasia, la India, el Pakistán y Trinidad y Tabago expresaron inquietudes o pidieron aclaraciones sobre las consecuencias que podría tener un marco multilateral sobre la política de competencia respecto de las posibilidades de los países en desarrollo de aplicar una política industrial destinada a impulsar el desarrollo. Se sugirió, además, que los elementos básicos propuestos en el primer documento del Japón (WT/WGTCP/W/156), así como en el de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (WT/WGTCP/W/152), sobre todo la no discriminación, podrían limitar la flexibilidad con que contaban los Miembros para recurrir a medidas de desarrollo, como la utilización de incentivos financieros para I + D. El representante de Malasia añadió que el documento del Japón (WT/WGTCP/W/157) había confirmado la opinión de su delegación en el sentido de que, al menos en las etapas iniciales del desarrollo económico, los países como Malasia necesitaban un grado importante de flexibilidad. Los Acuerdos de la Ronda Uruguay ya habían limitado algunas de las posibilidades con que contaba Malasia. Esto contrastaba con la situación que había tenido el Japón, al menos en la etapa inicial de su desarrollo económico. Los países en desarrollo necesitaban contar con flexibilidad para poder administrar ciertas medidas en favor de sus nacionales y de su público. Aun cuando se adoptara en definitiva un método sectorial, como en el AGCS, a Malasia le resultaría difícil aceptarlo. Se pidieron aclaraciones sobre las clases de flexibilidad que los países en desarrollo podrían tener a este respecto. También se pidieron aclaraciones al Japón acerca de si la Comisión de Comercio Leal aplicaba rigurosamente la Ley

Antimonopolios. El representante del Pakistán añadió que sería importante disponer de un análisis de ciertas cuestiones conexas, como las exclusiones, el tema de la aplicación gradual y el mantenimiento de un margen para las medidas de política industrial en los casos muy sensibles.

28. Los representantes del Japón y de la Comunidad Europea y sus Estados miembros respondieron que la cuestión de las subvenciones no se relacionaba en modo alguno con los elementos de un acuerdo multilateral sobre la competencia. Existían en la OMC disciplinas independientes sobre esas cuestiones. Cualquiera que fuese la forma de un acuerdo multilateral sobre la competencia, no tendría consecuencias en las posibilidades de los países de aplicar subvenciones. Ese tema, si se trataba, sería objeto de otras deliberaciones en la OMC.

29. El representante de la India, reflexionando sobre el documento presentado por Trinidad y Tabago en la reunión precedente del Grupo de Trabajo (WT/WGTCP/W/143), dijo que la India compartía los temores y las inquietudes manifestadas por Trinidad y Tabago, en particular el de que los efectos de fomento del bienestar producidos por la competencia podrían escaparse de la economía si las empresas locales eran desplazadas por empresas extranjeras. El representante de Filipinas dijo que en un régimen de competencia perfecta había siempre algunos que tendrían ventajas intrínsecas y, en consecuencia, obtendrían una proporción desmedida de los beneficios. Por lo tanto, una política basada en el ideal de la competencia perfecta significaba la marginación más acelerada de otros. Era evidente que no serían los países desarrollados los que se verían marginados.

30. El representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros dijo que las propuestas en discusión no tenían por objeto lograr la competencia perfecta. Lo que con ellas se procuraba era ayudar a todos los países, incluidos los países en desarrollo, a tratar con mayor eficacia abusos anticompetitivos que perjudicaban su desarrollo, su comercio y su bienestar económico. En particular, el marco multilateral propuesto permitiría a las autoridades encargadas de la competencia de los países en desarrollo eliminar esos tipos de prácticas. En consecuencia, ese marco no debía verse como un elemento que contribuiría a la marginación, sino que en realidad ofrecía a los países en desarrollo un instrumento para hacer frente a prácticas que, como habían mostrado las deliberaciones tanto en el Grupo de Trabajo como en la UNCTAD, repercutían de manera fuertemente negativa en su bienestar.

31. Con respecto a las consideraciones generales sobre los beneficios que podría aportar un marco multilateral sobre la política de competencia, el representante del Pakistán dijo que cada uno de los elementos de los llamados principios básicos mencionados en los documentos del Japón (WT/WGTCP/W/156) y la Comunidad Europea y sus Estados miembros (WT/WGTCP/W/152) requería una aclaración más precisa y un examen sucesivo. Observó, por ejemplo, que la mayoría de los Miembros ya disponía de mecanismos que aseguraban la transparencia de las leyes y reglamentaciones sobre la competencia que tuvieran en vigor y, en términos generales, no existía discriminación entre las empresas nacionales y las extranjeras. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo debería ir más allá en la interpretación de la necesidad de los principios propuestos. El representante de Malasia dijo que el problema planteado era si debían existir o no normas mundiales sobre la competencia. Malasia siempre había afirmado que debía quedar librada a las autoridades nacionales la existencia o inexistencia de un derecho interno en materia de competencia. Ello debía depender de que favoreciera o no el desarrollo económico. Correspondía totalmente a las autoridades nacionales decidir al respecto y determinar los elementos de ese derecho. Desde luego, si existía un derecho en esa materia tendrían que haber ciertos elementos básicos relacionados con las prácticas comerciales restrictivas.

32. El representante de Hong Kong, China, observó que entre los 138 Miembros de la OMC sólo unos 80 habían dictado leyes nacionales sobre la competencia. Si por "multilateral" se entendía la totalidad de los Miembros, sería preciso tener en cuenta la diversidad existente entre los que tenían esas leyes y los que no las tenían y tomar en consideración también la diversidad existente entre los

países que disponían de leyes sobre la competencia. Además, las expresiones "derecho de la competencia", "política de competencia" y "régimen de competencia" se habían empleado en muchas de las comunicaciones con laxitud y, en ciertos casos, como expresiones intercambiables. Como ejemplo de las confusiones que esto originaba, con arreglo al régimen interno de Hong Kong, China, existían elementos relativos a la competencia en diversas normas legales; pero no era evidente que pudiese dárseles el nombre de "derecho de la competencia" o "política de competencia". El representante de Indonesia convino en que era importante la cuestión de las definiciones para los países que no eran de habla inglesa, como Indonesia, ya que en esos países podían producirse diversos malentendidos sobre lo que se entendía por política de competencia, derecho de la competencia, etc.

33. La representante de Australia dijo que su delegación recibía con agrado la oportunidad que ofrecían las diversas contribuciones para concentrarse, en particular, en temas como los cárteles, la aplicación de la cooperación, la asistencia técnica, el comportamiento anticompetitivo y otras cuestiones que se habían planteado. Los elementos de un marco multilateral expuestos en el documento de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (WT/WGTCP/W/152) ofrecían una base realista para las deliberaciones sobre las ventajas e inconvenientes de tal marco, en el presente y en el futuro. Los documentos de Corea (WT/WGTCP/W/154), el Japón (WT/WGTCP/W/156), Suiza (WT/WGTCP/W/151) y el Canadá (WT/WGTCP/W/155) confirmaban el carácter prioritario de esos elementos en las deliberaciones del Grupo de Trabajo y la necesidad de evaluarlos, así como las demás cuestiones, de manera progresiva para llegar al punto en que el Grupo de Trabajo pudiera examinar la viabilidad de un marco multilateral a partir de una interpretación común de las cuestiones y de las diversas necesidades y posibilidades de los distintos Miembros.

34. El representante de Hungría dijo que, en relación con los posibles elementos o el posible contenido de un acuerdo marco multilateral sobre la política de competencia, la opinión de Hungría sobre lo que era al mismo tiempo conveniente y viable coincidía en gran medida con lo expuesto en el anexo de la propuesta de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (WT/WGTCP/W/152) sobre los principios básicos del derecho y la política en materia de competencia, las modalidades de cooperación y el apoyo a las instituciones encargadas de la competencia en los países en desarrollo. A la vez, Hungría coincidía con aquellas delegaciones que habían hecho hincapié en que diversas cuestiones requerían aclaraciones, mayor detalle y análisis. Una de las cuestiones fundamentales era el tipo y el grado de la flexibilidad que podía ofrecer a los Miembros el marco multilateral previsto, en particular a los países en desarrollo, pero no exclusivamente a ellos.

35. El representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros dijo que los diversos elementos planteados en el documento de su delegación (WT/WGTCP/W/152) eran compatibles con un alto grado de flexibilidad para los países en desarrollo y los distintos Miembros de la OMC que fueran partes en tal acuerdo. Era evidente que cualquier acuerdo internacional suponía algunos límites a la flexibilidad para los países. En eso consistía, por definición, un acuerdo internacional. Sin embargo, al mismo tiempo, los países concertaban esos acuerdos porque consideraban que sus ventajas y beneficios superaban las restricciones que pudieran existir.

36. El representante de Filipinas dijo que la idea de los proponentes de un marco multilateral parecía consistir en trasplantar todo el sistema de leyes que había evolucionado en los países desarrollados a lo largo de los años a los países en desarrollo, muchos de los cuales carecían de la memoria institucional y de la conciencia cultural necesarias para aplicar esas leyes y podrían encontrar difícil cumplirlas. A esta altura, para Filipinas, la cuestión planteada sería determinar qué beneficios podrían obtener los países en desarrollo por contraer más obligaciones a cambio de lograr la asistencia de los países desarrollados para aplicar las leyes de éstos. Si las leyes sobre la competencia efectivamente eran buenas para los países en desarrollo, no había necesidad alguna de un acuerdo multilateral, pues los países las establecerían por sí mismos. En la actualidad, si los países en desarrollo cometían un error, siempre podían modificar sus leyes para ajustarse a sus necesidades

nacionales propias. Pero si debían adherirse a normas mínimas de un marco multilateral perderían la flexibilidad de adaptar sus leyes para ajustarlas a sus necesidades particulares.

37. El representante de Noruega dijo que cuando un país en desarrollo se enfrentaba con la alternativa de establecer o no un régimen en materia de competencia tendrían que apreciarse varios elementos, entre los cuales los más importantes eran el nivel de desarrollo económico y la formulación de la política económica. Los Acuerdos de las OMC aplicados en otras esferas figuraban entre los elementos más dinámicos que constituían el marco dentro del cual los países en desarrollo tendrían que adoptar sus decisiones. Como había indicado el representante del Canadá, la actual red de acuerdos de cooperación para hacer frente a las prácticas anticompetitivas presentaba grietas que las empresas explotarían apuntando a los países que no estuvieran dotados de un régimen adecuado en materia de competencia y acuerdos de cooperación. Noruega veía en un marco multilateral la solución que permitiría ayudar a los países en desarrollo a evitar que las empresas internacionales dañaran sus perspectivas de desarrollo dedicándose a prácticas anticompetitivas a medida que los mercados de esos países se liberalizaran progresivamente por efecto de la aplicación de los Acuerdos de la OMC. Representaría la mejor solución para los países en desarrollo a fin de contrarrestar cualquier efecto negativo del proceso de mundialización. Como habían señalado los Estados Unidos, el establecimiento de una cultura de la competencia era una tarea difícil y requería tiempo. En consecuencia, el acuerdo marco propuesto se planteaba como un instrumento que podía contribuir a la aplicación eficaz, por los Miembros, de una política en materia de competencia.

38. Con respecto a los elementos concretos de un marco multilateral sobre política en materia de competencia, el representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros dijo que, además de los principios fundamentales de la OMC sobre no discriminación y transparencia, convenía definir en un acuerdo multilateral sobre la competencia un principio básico referente a los cárteles intrínsecamente nocivos. La necesidad de medidas eficaces contra esas actividades económicas perniciosas era uno de los aspectos de fondo de la política de competencia en que existía un grado importante de coincidencia entre países con diferente nivel de desarrollo.

39. El representante de Malasia dijo que las propuestas incluidas en los documentos de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (WT/WGTCP/W/152) y el Japón (WT/WGTCP/W/156) contenían referencias a principios básicos como el trato nacional, que Malasia no podía otorgar en esta etapa de su desarrollo económico. Los países en desarrollo necesitaban contar con flexibilidad para poder administrar ciertas medidas en favor de sus nacionales y de su público. Aun cuando se adoptara en definitiva un método sectorial, como en el AGCS, a Malasia le resultaría difícil aceptarlo. El representante de Hong Kong, China, dijo que era derecho de los Miembros convenir en que los principios de no discriminación y transparencia eran fundamentales para el derecho de la competencia o para la política en materia de competencia, como sin duda lo eran para la OMC. El problema se refería a si la observancia de esos principios planteaba efectivamente problemas para algunos Miembros en su derecho sobre la competencia o su régimen en esa materia. El orador se preguntó si existían ejemplos de Miembros que no siguieran esos principios básicos y, en tal caso, si verdaderamente existía necesidad de una vigilancia de más alto nivel en el plano multilateral. Más allá de ese aspecto, en lo referente a los problemas de las medidas de fondo a que podrían aplicarse los principios y a los procedimientos respectivos, haría falta un diálogo exploratorio más amplio antes de que los Miembros pudieran captar las consecuencias prácticas para la aplicación de la política interna.

40. El representante de Túnez dijo que, sin perjuicio de cualquier posición que se adoptara en definitiva, algunos puntos requerían una consideración más detenida en el proceso de estudio. Con respecto a la pertinencia de los principios de la OMC en la política sobre competencia y viceversa, debía respetarse cierta especificidad en su aplicación a la política en materia de competencia. Si se tomaba la política de competencia en su sentido más amplio, abarcaba temas ya incluidos en la política comercial y en las obligaciones que los Miembros habían asumido. Si la política sobre

competencia se tomaba limitándola a la protección legal de la competencia, surgían cuestiones como la aplicabilidad de esos principios a los operadores privados, porque se trataba de principios destinados principalmente a las medidas gubernamentales. ¿Deberían aplicarse esos principios a la forma en que el Estado pusiera en práctica su política sobre competencia, o se trataba de sustituir esos principios por una obligación que, en alguna medida, estaría garantizada por un recurso de apelación? Mirando las cosas con esta perspectiva, ¿por qué deberían limitarse los principios al derecho referente a la competencia, sin alcanzar a otros temas jurídicos? La obligación de no discriminación ya estaba incorporada en los compromisos de los Miembros respecto del comercio de mercancías. ¿Por qué hacía falta un nuevo instrumento? Si el principio de no discriminación se miraba desde la perspectiva de la oferta, resultaba atendible; pero no era evidente si se lo miraba con la perspectiva de la demanda. Desde el punto de vista jurídico significaría eliminar la tolerancia para los efectos exteriores y, en la práctica, podía llevar a la aplicación extraterritorial del derecho interno. Con respecto al principio de no discriminación, en relación con el volumen y el alcance de un mercado en determinado momento, ¿se abriría la puerta de este modo para un trato equitativo de los sectores organizado y no organizado? Ese objetivo ya era difícil de lograr en el plano interno. Del mismo modo, también era importante aclarar la aplicación de la transparencia con arreglo a las propuestas presentadas. ¿Se aplicaría a las obligaciones de los Estados, a las obligaciones de las instituciones, o en relación con las prácticas mercantiles?

41. El representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros dijo que el tipo de no discriminación previsto en un marco multilateral como el que se contemplaba se referiría a si el derecho sobre la competencia, en sí mismo, contenía alguna clase de discriminación por razones de nacionalidad. La delegación del orador, en sus propuestas, no procuraba abordar la cuestión mucho más vasta de si un país podría o no mantener reglamentaciones internas de carácter discriminatorio fuera del ámbito de aplicación de la legislación sobre la competencia. También había procurado aclarar que, a su juicio, los elementos obligatorios de un marco multilateral sobre la política de competencia se referirían únicamente a la legislación y no a la forma en que se la aplicara. Por lo tanto, la discriminación *de jure* debería incluirse como compromiso obligatorio en un acuerdo multilateral sobre política de competencia. Sin embargo, si se trataba de la discriminación de hecho, resultaría muy difícil evitar situaciones en que la aplicación de la ley se viera afectada en casos determinados. A juicio de la delegación del orador, tal resultado no era conveniente. En consecuencia, su delegación preveía que las cuestiones relativas a la discriminación de hecho no deberían tratarse como elementos obligatorios de un marco multilateral. El representante de Suiza dijo que el mero hecho de que el Grupo de Trabajo no tuviera ante sí pruebas de violación sistemática de la no discriminación y la transparencia en la esfera del derecho y la política en materia de competencia no era fundamento para dejar de afirmar la importancia de esos principios. Esto resultaba particularmente claro en el caso de la transparencia. Las recomendaciones y los procedimientos establecidos en el marco de la OCDE habían asegurado cierto nivel de transparencia entre los miembros de la organización respecto de sus leyes y políticas nacionales sobre la competencia. Sin embargo, el orador tenía dudas de que los países no miembros de la OCDE tuvieran un conocimiento suficiente de la legislación y la política de los miembros de la OCDE, o de los demás países. Desde luego, cuanto mayor fuera el número de países que hubieran adoptado y aplicaran leyes sobre la competencia, más apremiante sería la necesidad de contar con nuevos mecanismos para asegurar la transparencia y la no discriminación en el plano multilateral.

42. Con respecto al tema de las exclusiones, incluso con respecto a los principios fundamentales de la OMC, el representante de Corea, comentando el documento de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, dijo que las exclusiones eran indispensables para que pudiera generarse impulso en favor de negociaciones abiertas acerca de un acuerdo sobre la política de competencia. Sin embargo, para el funcionamiento del acuerdo a lo largo del tiempo era importante que se eliminara gradualmente el mayor número posible de exclusiones, pues la falta de competencia en un sector afectaba, la mayoría de las veces, a otros sectores. Así, como ocurría con diversos Acuerdos de la OMC, como el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido, un acuerdo sobre la política de competencia

debería establecer períodos de transición que admitieran exclusiones iniciales pero las eliminaran en la mayor medida posible en forma gradual. El representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros dijo que, a juicio de su delegación, la cuestión de la no discriminación era diferente del temas de las exclusiones sectoriales. Su delegación reconocía que, por diversas razones, la mayoría de los países había considerado necesario aplicar ocasionalmente exenciones de sus leyes internas sobre la competencia. Por lo tanto, la Comunidad y sus Estados miembros habían adoptado el criterio de que las disposiciones coercibles de un marco multilateral relativas a exclusiones sectoriales deberían limitarse a medidas tendientes a asegurar la transparencia de tales exclusiones, aunque cabía esperar que, con el tiempo, los Miembros redujeran también el número de esas exclusiones.

43. Con respecto al papel de las disposiciones relativas a la cooperación en un marco multilateral sobre la política de competencia, los representantes del Canadá, la Comunidad Europea y sus Estados miembros, Suiza, Hungría, Noruega, el Japón y Corea dijeron que era importante que los países pudieran tratar eficazmente las prácticas anticompetitivas en una economía que se mundializaba y, por lo tanto, esas disposiciones debían constituir elementos integrantes de un marco multilateral sobre la política de competencia. Los representantes del Pakistán y la India, sin aceptar la necesidad de un marco multilateral sobre la política de competencia, señalaron que sus países, en principio, consideraban conveniente una mayor cooperación internacional en vista de toda la cuestión de las empresas internacionales que actúan a través de las fronteras, y de los beneficios que esa cooperación, incluida la cooperación técnica, podrían ofrecer para tratar las prácticas anticompetitivas en esas condiciones.

44. El representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros dijo que, aunque su delegación no había propuesto la aprobación de principios básicos sobre el derecho de fondo en materia de competencia salvo en la esfera de los cárteles intrínsecamente nocivos, el alcance y el ámbito de aplicación de las leyes internas sobre la competencia quedaba librado, por lo demás, a la determinación de cada país. En la medida en que el alcance de las normas internas prohibiera otras prácticas anticompetitivas, como los abusos de la posición dominante o el control de las fusiones, que en principio eran deseables, la cooperación también podría desarrollarse respecto de esas prácticas. En otras palabras: el ámbito de aplicación de las medidas propuestas en cuanto a la cooperación no se limitaba ciertamente a los cárteles intrínsecamente nocivos.

45. El representante de Malasia dijo que el documento del Canadá (WT/WGTCP/W/155) había señalado que la cooperación podía adoptar múltiples formas y que podía existir sin normas mundiales sobre política de competencia. Los representantes de la India; Hong Kong, China; Indonesia; Trinidad y Tabago; y los Estados Unidos señalaron que el mismo documento hacía hincapié en que, para lograr resultados óptimos, la cooperación entre las autoridades encargadas de la competencia debería ser voluntaria. En realidad, el término "cooperación" significaba por definición una cooperación de carácter voluntario. Obligar a alguien a cooperar no era en sí mismo una cooperación. Por consiguiente, el significado y las consecuencias de la cooperación en el contexto de un marco multilateral obligatorio requerían aclaraciones. Por ejemplo: ¿se aplicaría la solución de diferencias si no se intercambiaban determinados tipos de información? También se indicó que, entre los seis "indicadores" útiles y pertinentes mencionados al final del documento del Canadá, cuatro se referían a condiciones previas de la cooperación y dos se referían a la creación de capacidad y el apoyo. Se sugirió que esas seis cuestiones podrían tratarse todas por fundamentos propios y que no hacía falta un marco multilateral de normas para asegurar los progresos en esas esferas. El representante de Hong Kong, China, indicó, además, que la experiencia de Hong Kong, China, en el Grupo sobre Política de Competencia y Desreglamentación del APEC mostraba que el intercambio general de informaciones entre las instituciones encargadas de la competencia, el fomento de la transparencia de los regímenes de competencia y la aplicación de diversas iniciativas de asistencia técnica eran otros tantos temas que podían desarrollarse satisfactoriamente en forma voluntaria y no obligatoria. El orador preguntó si el Canadá estaba dispuesto a llevar adelante algunos de los

elementos propuestos en materia de cooperación fuera del contexto de las negociaciones multilaterales.

46. El representante del Pakistán dijo que su país figuraba entre los que estaban convencidos de la existencia de argumentos que hacían conveniente una mayor cooperación internacional entre las autoridades encargadas de la competencia. Sin duda podían existir diversas modalidades para alcanzar ese objetivo. El Grupo de Trabajo no debería obstinarse en aplicar determinada modalidad, siempre que lograra adelantos respecto del objetivo final. Lo esencial del asunto era que los Miembros determinaran juntos ciertas esferas que requerían cooperación internacional. Tal vez el Grupo de Trabajo pudiera comenzar por las fusiones, sin que ello supusiera que las fusiones fueran las únicas prácticas que inspiraban inquietud.

47. El representante de Túnez dijo que, sin dejar de reconocer los intereses de los países en desarrollo respecto de la cooperación en materia de política de competencia, era necesario entrar en detalles más precisos acerca de ciertos elementos relacionados con ella. ¿Cuál era el grado de eficacia de los acuerdos, a la luz de las prácticas actuales y del desequilibrio que se observaba en el poder de las instituciones encargadas de la política de competencia entre los países desarrollados y los países en desarrollo? ¿Representaban los acuerdos de cooperación la única posibilidad para resolver los problemas planteados? ¿Tendría que formalizarse esa cooperación, y en qué nivel? ¿Cómo podría invocarse un acuerdo en relación con los ya existentes, aunque fueran facultativos, independientemente de que el primero fuera multilateral o plurilateral? Y esta pregunta conducía a otra: ¿qué alcance tendrían las prácticas que se tratarían? ¿A qué mercados afectaban? ¿En qué marco jurídico funcionaban? ¿Qué ocurría con los países que aplicaban directrices, como las referentes a los cárteles intrínsecamente nocivos? ¿Bastaría esto en sí mismo, o sería preciso inculcar esa práctica en los países en desarrollo? ¿Qué mercado quedaba afectado: se trataba del mercado mundial, o del mercado interno, desde el punto de vista jurídico? ¿Qué prioridades se asignarían a las prácticas anticompetitivas y la discriminación? Si el objetivo esencial eran prácticas internacionales, ¿cómo podrían tratarse con eficacia mediante la aplicación de leyes nacionales? ¿Qué consecuencias tendrían los diferentes métodos analíticos respecto de la cooperación? ¿Sería preciso persuadir a las autoridades de los países participantes de la validez de los análisis efectuados por otros países? En ese caso, ¿no equivaldría ello a un nuevo procedimiento de examen? ¿Cuál era la relación entre los tratados de cooperación y los tratados de asistencia jurídica? ¿Cómo se integrarían los instrumentos propuestos sobre cooperación en las disposiciones de la OMC sobre las medidas gubernamentales; y afectaría o no un marco multilateral al concepto de independencia de las autoridades encargadas de la competencia? Todo esto tendría que aclararse, porque no se trataba de un concepto incorporado en los diferentes sistemas jurídicos.

48. Respondiendo a estas preguntas, los representantes del Canadá y la Comunidad Europea y sus Estados miembros afirmaron que la cooperación prevista en las propuestas de marco multilateral sobre la política de competencia era de naturaleza esencialmente voluntaria. El representante del Canadá añadió que, en la concepción de su país sobre tal acuerdo, que compartía muchas de las propuestas presentadas en el documento de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (WT/WGTCP/W/152), el acuerdo sería relativamente modesto y en él las normas obligatorias sólo tendrían sentido en determinadas esferas. Ciertamente no tendrían sentido normas obligatorias en materia de cooperación. Cualquier otra cosa representaría una contradicción intrínseca. Tampoco parecía evidente al Canadá que hubiera amplio margen para normas obligatorias en la esfera de la asistencia técnica. Respondiendo a otra pregunta concreta de Hong Kong, China, el orador aclaró también que el Canadá no se refería simplemente a un acuerdo sobre cooperación en la aplicación del derecho de la competencia. La cooperación era un aspecto fundamental, pero ciertamente no era el único. Los componentes de un acuerdo eran fundamentalmente interdependientes. La asistencia técnica y los principios básicos eran partes indispensables de un acuerdo y eran fundamentales para facilitar la cooperación. El orador sugirió también que la cooperación dependía de la familiaridad necesaria para generar confianza mutua. Desde el punto de vista de las partes beneficiadas no era una

avenida de un solo sentido. Era de provecho mutuo para los países, y sus beneficios podían ir fácilmente en ambos sentidos, por ejemplo, según dónde se encontrara en cada caso la información. Por lo tanto, sería parte natural de un acuerdo y fundamental para facilitar un acuerdo multilateral. El Canadá seguía considerando que tal marco contribuiría mucho en cuanto a ayudar a los países en desarrollo y otros países a hacer frente a los efectos perjudiciales de las prácticas anticompetitivas en el comercio y el desarrollo. El representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros dijo que la circunstancia de que la cooperación, en última instancia, siguiera siendo de carácter voluntario no debía interpretarse en modo alguno en el sentido de que el marco propuesto no mejoraría considerablemente el entorno y los incentivos para la cooperación entre los países participantes. Un aspecto esencial del marco sería un compromiso de los países de consultarse y procurar soluciones mutuamente aceptables sobre diversas materias relacionadas con las prácticas anticompetitivas que tienen una dimensión internacional. Si se observaba el hecho de que existían coincidencias sobre principios básicos, habría no sólo consultas bilaterales, sino un ámbito multilateral para el intercambio de puntos de vista y experiencias y existiría un reconocimiento específico de las necesidades de los países en desarrollo en materia de cooperación, debería resultar claro que la estructura de incentivos tendría que ser suficientemente sólida para intensificar considerablemente la cooperación entre países con diferente nivel de desarrollo. En cierto sentido, un acuerdo multilateral no sólo fomentaría una cultura de la competencia: también promovería una cultura de la cooperación que iría más allá de lo que la realidad mostraba actualmente. El representante de los Estados Unidos coincidió en que el carácter voluntario era esencial para una cooperación significativa. Sin ese carácter cabía imaginar resultados contrarios al interés de numerosos Miembros, incluidos los Estados Unidos; es decir, el fomento de la cultura de la política de competencia y la aplicación del derecho de la competencia en todo el mundo.

49. El representante de Corea señaló que el documento de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (WT/WGTCP/W/152) se refería a la "cortesía negativa" pero no a la "cortesía positiva", concepto éste que ofrecía beneficios que Corea había promovido en numerosas comunicaciones al Grupo de Trabajo. La cortesía positiva era un concepto basado en que si un país consideraba que una o más de sus empresas se veían afectadas por prácticas anticompetitivas extranjeras recurriría al país en que se producían esas prácticas para pedir que aplicase su propia legislación sobre la competencia a fin de reparar lo que el país reclamante consideraba medidas perjudiciales. Como se había indicado en un informe de la OCDE adoptado en mayo de 1998 por su Comité de Derecho y Política sobre la Competencia, la cortesía positiva estaba incorporada actualmente en diversos acuerdos bilaterales adoptados desde que los Estados Unidos y la Comunidad Europea lo introdujeran en su acuerdo bilateral de 1991. Aunque los Miembros de la OMC carecían de experiencia en esa materia y sólo contaban con unos pocos casos en que se había empleado efectivamente la cortesía positiva, parecía que los beneficios de ésta podían ser reales cuando permitiera evitar los efectos perjudiciales de la extraterritorialidad.

50. El representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros respondió reconociendo que el documento de su delegación (WT/WGTCP/W/152) no utilizaba la expresión "cortesía positiva". Su objetivo era que los países en desarrollo que se convirtieran en blanco de prácticas anticompetitivas organizadas en el extranjero pudieran formular una solicitud al país o a los países en que tuvieran su origen esas prácticas o en que tuvieran su sede central las empresas sospechosas de actividades anticompetitivas para que se adoptasen medidas a fin de remediar la situación o responder en otra forma a las inquietudes del país solicitante. El país que recibiera la solicitud debería entablar consultas y considerar esas solicitudes con ánimo favorable. Por lo tanto, la propuesta no se refería a un instrumento completo sobre la cortesía positiva como habían propuesto Corea y el Japón. En el momento actual era prematuro esperar compromisos de mayor alcance en un marco multilateral, por lo menos durante una etapa inicial.

51. Los representantes de Trinidad y Tabago, la India y el Pakistán plantearon la cuestión de si los instrumentos de cooperación voluntarios, incluida la cortesía positiva si en definitiva se la

adoptaba como elemento del marco previsto, bastarían para resolver los problemas y las inquietudes de los países en desarrollo respecto de las prácticas anticompetitivas, sobre todo a la luz de las disparidades y desigualdades existentes en el poder de negociación. Se sugirió que esta cuestión tendría que abordarse a la luz del hecho de que, en última instancia, la responsabilidad de la aplicación de las normas recaía en el país con jurisdicción primaria sobre las prácticas anticompetitivas de que se tratase, y de que la asistencia para la aplicación de las normas sería de carácter voluntario, es decir, compatible con las prioridades en materia de aplicación de las normas, los intereses importantes y los recursos disponibles del país al que se dirigiera la solicitud. La respuesta a esta cuestión era importante para evaluar la utilidad de un acuerdo marco que pudiera reunir a países en etapas diferentes del desarrollo económico. El representante de Trinidad y Tabago añadió que, como el argumento fundamental que se planteaba era que el proceso de mundialización había acentuado los efectos transfronterizos del comportamiento anticompetitivo y ello hacía necesario mundializar algunos aspectos del derecho de la competencia, surgía el problema de si ello era o no compatible con la posición según la cual las autoridades encargadas de la competencia tenían su actividad limitada a los comportamientos que afectaran a su mercado interno. El representante del Pakistán sugirió que había a este respecto dos peligros. En primer lugar, existía el peligro de que las disposiciones sobre cooperación pudieran reducirse a disposiciones no imperativas; en segundo lugar, existía el peligro de que la lista de criterios para la participación en esos intercambios pudiera ser tan extensa que algunos países pudiesen negar su colaboración basándose en que las autoridades solicitantes no cumplían algunos requisitos. A la luz de ello, era importante comprender cómo funcionarían exactamente las disposiciones sobre cooperación incluidas en un marco multilateral. ¿Podrían discutirse realmente los efectos de los casos concretos de fusiones, cárteles de exportación, fijación de precios a escala internacional, etc.? El representante de la India dijo que eran dudosas las posibilidades de los países en desarrollo de imponer disciplinas a las grandes empresas transnacionales, aun cuando existiesen normas multilaterales.

52. En su respuesta, el representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros dijo que parecía haber cierto grado de consenso entre los miembros del Grupo de Trabajo en que no era razonable pretender obligar a una autoridad a cooperar cuando no se cumplían determinadas condiciones y advertencias. Su delegación había expuesto con claridad, en su contribución escrita para esta reunión (WT/WGTCP/W/152), cuáles deberían ser esas condiciones. No se trataba de condiciones arbitrarias, y tenían su origen en la experiencia de la Comunidad en materia de cooperación bilateral. La cooperación entre autoridades encargadas de la competencia era un proceso de aprendizaje en que tenía importancia el fomento de la confianza. Se trataba de un terreno en que las relaciones se desarrollaban con el curso del tiempo y se basaban al comienzo en el interés mutuo, como había señalado el Canadá. No obstante, el carácter intrínsecamente voluntario de la cooperación establecido en el proyecto de marco debía interpretarse en el contexto del compromiso que suponía la aceptación de éste. En tal sentido, si una solicitud de cooperación era razonable y tenía motivos adecuados, el orador manifestó la confianza de que las autoridades encargadas de la competencia participantes no se negarían a examinarla con ánimo favorable a pretexto de que no constituía una cuestión prioritaria o de que las autoridades carecían de los recursos necesarios.

53. Los representantes de la India; Hong Kong, China; Indonesia; el Pakistán; y Filipinas plantearon la cuestión de si la cooperación en un contexto bilateral o regional podía bastar para resolver los efectos perjudiciales de las prácticas anticompetitivas que se advertían para el comercio internacional y el desarrollo. Hacía falta una evaluación objetiva de esos mecanismos de cooperación. El representante de Hong Kong, China, planteó además que en la comunicación de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (WT/WGTCP/W/152) se habían subestimado de manera flagrante las ventajas de los métodos bilaterales y regionales en comparación con un método multilateral. Por ejemplo, se había hecho allí escasa mención del tiempo de negociación más breve y los niveles más altos de los criterios de cooperación que se presentaban en el ámbito bilateral o regional. Al mismo tiempo, el representante de la India planteó que los mecanismos bilaterales y regionales existentes se limitaban en gran medida a países en etapas similares de desarrollo. En ese contexto, si se llegaba a

un nuevo mecanismo de cooperación internacional, ¿cómo podría asegurarse que esa cooperación se extendería a países en diferentes etapas de desarrollo?

54. En su respuesta, el representante del Canadá, sin dejar de afirmar los importantes beneficios que podían extraerse de los mecanismos de cooperación bilateral, sugirió sin embargo que había razones prácticas y de fondo importantes en favor de un acuerdo multilateral. Refiriéndose ante todo a los aspectos prácticos, dijo que los cárteles intrínsecamente nocivos y los cárteles internacionales difícilmente respetarían los territorios precisamente definidos abarcados por los acuerdos bilaterales. En realidad, era razonable presumir que tenderían a actuar estratégicamente y a buscar las grietas que existieran entre los acuerdos regionales y bilaterales pertinentes. Los Miembros sólo podrían impedir ese tipo de comportamiento estratégico disponiendo de una red adecuada que abarcara todas las zonas posibles, es decir, un marco multilateral. En lo referente a las fusiones, era posible imaginar que determinados elementos esenciales de información pudieran encontrarse en jurisdicciones situadas fuera del conjunto de los acuerdos bilaterales o regionales de un país. Actualmente no existían disposiciones de cooperación entre las regiones. Por ejemplo, el MERCOSUR no tenía disposiciones de cooperación con el APEC a pesar de que existía algún grado de superposición entre sus miembros. Por lo tanto, resultaba bastante fácil concebir la posibilidad de que determinados elementos de información fundamentales que permitirían un examen más profundo o más rápido de una fusión pudieran encontrarse en jurisdicciones no comprendidas en el conjunto de acuerdos celebrados por un país. Un acuerdo multilateral aseguraría que no ocurriese tal cosa. También desde el punto de vista práctico, para un país como el Canadá había considerables limitaciones operacionales de la medida en que podía realizarse la cooperación sobre la base del número limitado de personas y recursos disponibles. Con la negociación de diversos acuerdos regionales y bilaterales e iniciativas sobre libre comercio, el Canadá era consciente de que se estaba acercando rápidamente al límite de sus posibilidades. A juicio del Canadá, muchos de esos esfuerzos podrían racionalizarse y, en consecuencia, hacerse más eficaces, si pudieran desarrollarse multilateralmente. Podría existir, en la medida conveniente, una cooperación más intensa con determinados asociados, y sin duda había de ocurrir así. En opinión del Canadá, un acuerdo multilateral también sería un vehículo eficaz para acentuar el grado de compatibilidad, así como la familiaridad y la confianza mutua, entre las autoridades nacionales encargadas de la competencia, lo que era esencial para una cooperación eficaz. Por lo tanto, había una real necesidad de un acuerdo multilateral para promover la cooperación, en beneficio mutuo de los países participantes, a pesar de los reconocidos beneficios que los acuerdos de cooperación bilateral podían proporcionar en circunstancias adecuadas. El representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, tras hacer constar su acuerdo con las opiniones expresadas por el Canadá, añadió que los acuerdos bilaterales eran de número limitado y se basaban esencialmente en los intereses mutuos y la reciprocidad. Si se buscaba estimular la cooperación en niveles muy diferentes de desarrollo de los regímenes en materia de competencia, sería preciso inevitablemente ir más allá del método puramente bilateral y tomar en consideración el método multilateral en relación con la cuestión de la cooperación.

55. Con respecto a la prescripción propuesta de que la autoridad nacional encargada de la competencia tuviera suficientes facultades en materia de imposición de las normas, el representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros dijo que su delegación reconocía la necesidad de definir esa prescripción en forma suficientemente flexible y adaptada a las diversas realidades institucionales. Por ejemplo, en una intervención anterior Trinidad y Tabago había indicado algunos de los problemas particulares a que debían hacer frente, por ejemplo, los pequeños países en desarrollo para establecer una autoridad encargada de la competencia organizada en escala completa. A juicio de la delegación del orador, el elemento esencial consistía en que, en última instancia, si se deseaba una cooperación eficaz tenía que haber una autoridad capaz de dedicarse a tal cooperación. Tendrían que existir facultades suficientes de aplicación de las normas para detectar las prácticas anticompetitivas y sancionar esas prácticas.

56. Los representantes de Trinidad y Tabago y el Pakistán pidieron aclaraciones sobre la función que los proponentes de un marco multilateral sobre la política de competencia contemplaban respecto de la aplicación del Entendimiento sobre la Solución de Diferencias de la OMC. La representante de Trinidad y Tabago añadió que su país albergaba dudas de que el Entendimiento sobre la Solución de Diferencias de la OMC fuera adecuado para tratar las cuestiones referentes a la competencia y estimaba que serían más adecuados los mecanismos de cooperación. La oradora apreciaba que en el documento se definiera la no discriminación como aplicable únicamente en lo relativo al acceso a las autoridades encargadas de la competencia, el acceso al sistema judicial y la aplicación del derecho nacional en materia de competencia.

57. El representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros afirmó en su respuesta que su delegación estimaba que, si se deseaba intensificar la cooperación en el campo de la competencia, era preciso avanzar hacia un acuerdo que incluyera un núcleo de compromisos obligatorios. Sin perjuicio de ello, como había señalado el Canadá, el alcance de esos compromisos obligatorios tendría que definirse muy cuidadosamente para no limitar indebidamente la flexibilidad de que disponían los países. Por esa razón su delegación, en el documento presentado, sólo había propuesto un número limitado de compromisos obligatorios respecto del marco jurídico nacional. Por ejemplo, el orador no proponía que la forma en que se aplicase la legislación en la práctica tuviera que considerarse sobre la base de un compromiso obligatorio. Como consecuencia lógica, se desprendía de ello que cualquier aplicación del mecanismo de solución de diferencias tendría que ajustarse para que correspondiera al alcance de los compromisos obligatorios derivados del acuerdo multilateral. La función de la solución de diferencias no se había analizado en el documento presentado por su delegación (WT/WGTCP/W/152) porque se había estimado que, en el momento actual, era más útil concentrarse en los elementos sustantivos que se incluirían en un acuerdo multilateral. No obstante, como su delegación había manifestado en otras oportunidades, entendía sin duda que no sería adecuado que las decisiones de las autoridades nacionales encargadas de la competencia adoptadas en casos individuales fueran objeto de revisión por el procedimiento de solución de diferencias.

58. El representante de Corea dijo que su delegación tenía una opinión diferente sobre la inclusión de la discriminación *de jure* y *de facto*. En opinión de Corea, sería excepcional que la legislación de un Miembro sobre la competencia contuviera disposiciones que discriminaran expresamente contra las empresas extranjeras. No obstante, podría haber muchas situaciones en que se aplicase de hecho un trato menos favorable a los casos en que participaran empresas extranjeras que a los casos similares que sólo se refiriesen a empresas nacionales. Por lo tanto, el principio de no discriminación debería aplicarse no sólo a la discriminación *de jure*, sino también a la discriminación *de facto*.

59. Con respecto al papel que cumpliría en el marco multilateral propuesto un mecanismo de examen por las demás partes, la representante de Trinidad y Tabago señaló que en el documento de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (WT/WGTCP/W/152) se preveía que sería de carácter voluntario. La oradora suponía que los resultados del proceso de examen no tendrían efectos vinculantes. Pidió aclaraciones sobre los objetivos de los exámenes propuestos, y si consistirían en una evaluación crítica de la política y la práctica de los Miembros en materia de aplicación de las normas o en ayudar a desarrollar la capacidad en ese aspecto. El representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros respondió que su delegación consideraba que éste sería un aspecto útil del marco multilateral propuesto. El examen por las demás partes, que efectivamente sería de carácter voluntario, sería un instrumento mediante el cual podrían analizarse en forma abierta y constructiva las cuestiones relacionadas con la aplicación de las normas. Por ejemplo, en el caso de los países en desarrollo podría utilizarse en algunos casos para determinar eventuales limitaciones de la capacidad. También podría emplearse para examinar la política seguida en materia de aplicación de las normas en determinados países. Sin embargo, era claro que no se trataba de un compromiso que supusiera el arreglo de diferencias.

60. Los representantes de Kenya, la India y Trinidad y Tabago dijeron que el tema de la cooperación técnica era importante y que no cabía esperar progresos importantes respecto de las cuestiones a menos que se debatieran convenientemente los temas de creación de capacidad. Esas cuestiones eran importantes no sólo a los fines de la creación de instituciones, sino también para mejorar la capacidad de los negociadores a fin de garantizar que en cualquier decisión que se adoptase pudieran representar eficazmente los intereses de los países en desarrollo. El representante de Kenya dijo que, cuando se aplicaba la política de competencia en el plano interno, se hacía más eficiente el aprovechamiento de los limitados recursos existentes para el desarrollo. Sin embargo, cuando se abrían los mercados internacionalmente, los países como el del orador, que contaban con limitados recursos y capacidad institucional, se veían expuestos a las actividades anticompetitivas de empresas nacionales y transnacionales. Las empresas transnacionales parecían dotadas de una considerable capacidad para evitar que se detectaran sus actividades, especialmente en los países que aún carecían de leyes nacionales sobre la competencia, pero también al margen de ello; esto determinaba un factor importante de la necesidad de fomento de la capacidad en esta esfera. La experiencia de Kenya en los últimos 10 años era que se había prestado muy poca asistencia, o absolutamente ninguna, en materia de política de competencia, salvo por la UNCTAD. La formulación de decisiones y el fomento de la capacidad eran dos temas en que la asistencia adquiriría particular importancia. Sin la asistencia necesaria en esas y otras cuestiones sería más conveniente concentrarse ante todo en la promoción de la política de competencia a fin de que fueran más y más los países que comenzaran a apreciar los beneficios y la función de la política de competencia en el proceso de desarrollo.

61. En su respuesta, el representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros dijo que su delegación estaba de acuerdo con el representante de Kenya en que los países en desarrollo no desearían entablar una negociación sobre la política de competencia sin contar con una buena comprensión de los problemas en juego. Por esta razón, su delegación adoptaba un criterio transparente y orientador al exponer sus ideas sobre los posibles elementos de un acuerdo multilateral, a fin de que los países pudieran examinar la cuestión más detenidamente y llegar a una decisión fundada sobre esa base. La Comunidad también había apoyado diversos seminarios regionales y otras actividades de fomento de la capacidad para ayudar a los países a estar en condiciones de adoptar decisiones sobre este tema con adecuado fundamento cuando llegara realmente la hora de tomarlas.

62. El representante de Corea dijo que su delegación compartía la opinión expresada en el documento de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (WT/WGTCP/W/152) de que la OMC podría hacer una contribución importante a un mejor enfoque de la prestación de asistencia técnica por la comunidad internacional sobre el derecho y la política en materia de competencia, particularmente si ello se hacía junto con la adopción de un marco multilateral. La detallada descripción que figuraba en la página 13 del documento era de particular interés. Como había destacado Corea en su comunicación anterior sobre la política de competencia, tenía máxima importancia la mejor coordinación entre las distintas organizaciones internacionales competentes para la prestación de asistencia técnica, sobre todo cuando se tratara de tareas concretas como la redacción de un proyecto de ley o la capacitación del personal de un organismo. El representante de Suiza también afirmó la importancia de esa asistencia, señalando que tal vez no se hubiera aclarado suficientemente en el documento de su delegación (WT/WGTCP/W/151).

63. El representante del Pakistán dijo que su delegación veía con cautela las promesas de asistencia técnica en vista de las deliberaciones que se habían desarrollado en la última reunión del Comité de Asuntos Presupuestarios y Financieros. No habían quedado claras muchas cosas, salvo que eran escasas o nulas las posibilidades de mayores recursos financieros. Los Miembros no deberían insistir demasiado en la asistencia técnica como incentivo, ni engañarse sobre su disponibilidad. En cualquier caso, la OMC no era un organismo de asistencia técnica. La OMC podría contribuir, pero eso era todo lo que podría hacer. Como estímulo para concertar un acuerdo, la asistencia técnica no era suficiente.

64. El representante de Hong Kong, China, dijo que varios de los elementos propuestos para un marco multilateral referente a la cooperación internacional y la asistencia técnica tal vez pudieran procurarse de manera más expeditiva fuera del contexto de las negociaciones, e incluso fuera del marco de la OMC. Por ejemplo, no parecía haber razón alguna para que los donantes interesados no comenzasen a trabajar ya en iniciativas para prestar más asistencia técnica y ayuda a los países en desarrollo para el cumplimiento de las normas. En cambio, al vincular tales iniciativas con negociaciones multilaterales se retrasaría indebidamente una asistencia de que los países en desarrollo tenían gran necesidad. Del mismo modo, resultaba difícil comprender la propuesta de que las modalidades de intercambio general de informaciones y experiencias que se mencionaba en los cuatro últimos incisos del punto 2 del anexo se llevaran a un marco multilateral obligatorio. Ya existían numerosos mecanismos especiales permanentes en la OMC y otros ámbitos internacionales para que los Miembros compartiesen información general y experiencias sobre cuestiones relativas a la política de competencia. El problema era la forma de lograr un aprovechamiento más eficaz y coherente de esos mecanismos, y no imponer a los Miembros nuevas obligaciones imperativas.

65. El representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros dijo que deseaba disipar cualquier equívoco en el sentido de que su delegación estuviera condicionando o retrasando en cualquier forma la asistencia técnica hasta el inicio de una negociación sobre el acuerdo multilateral. Por el contrario, además de otros donantes, la Comunidad y varios de sus Estados miembros estaban dedicados a la prestación de esa asistencia en numerosos países y regiones. Era indudable que quedaba mucho por hacer en esa esfera, aunque la delegación del orador seguía convencida de que, precisamente por las necesidades de fomento de la capacidad mencionadas por Kenya, podrían lograrse resultados mucho más importantes en el marco de las negociaciones de un marco multilateral. Otro representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros facilitó detalles sobre algunas actividades actuales de la Comunidad en materia de derecho y política de la competencia.

66. Los representantes de Hong Kong, China, Filipinas, la India y el Pakistán plantearon la cuestión de por qué, aun suponiendo que hiciera falta alguna medida en materia de política de competencia en el plano multilateral, era adecuado llevarla adelante en la OMC. El representante de Filipinas añadió que la OMC se ocupaba de concesiones arancelarias recíprocas y de la reglamentación de los obstáculos no arancelarios. Estos elementos definían el marco conceptual de la OMC. Eran estas consideraciones las que justificaban la existencia de un sistema de solución de diferencias y de reclamaciones sin infracción de disposiciones. Actualmente se estaban planteando nuevos temas en materias como la política de competencia, que estaban fuera del equilibrio de las concesiones negociadas. Si la OMC se ocupaba de esos temas, los Miembros podrían extender su jurisdicción inadvertidamente fuera de los límites establecidos en su origen. La delegación del orador veía con escepticismo la conveniencia de ello y deseaba que se la ilustrara sobre las razones por las que la OMC, inadvertidamente y sin la voluntad política consciente de la comunidad internacional, habría de convertirse en algo aún más poderoso en el contexto de la gestión de los asuntos mundiales. Tal cosa supondría un replanteo de la naturaleza clásica de la OMC y sus normas y prácticas básicas. El representante de la India dijo que la OMC era muy claramente el órgano competente para examinar cuestiones relativas a la interacción entre el comercio y la política de competencia, pero en la actualidad resultaba prematuro examinar si existía o no necesidad de formular un marco multilateral o, una vez establecida tal necesidad, cuál habría de ser el papel de la OMC a su respecto.

67. El representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros respondió que, en última instancia, esta cuestión tendría que resolverse a nivel político. Sin embargo, desde el punto de vista de su delegación, la OMC era ciertamente algo más que un instrumento para la negociación equilibrada de concesiones. Tenía el mandato de establecer normas que rigieran las relaciones internacionales de comercio y asegurar que los países en desarrollo y los demás Miembros no se vieran privados injustamente de los beneficios de la liberalización. Era difícil imaginar un aspecto de la política económica que estuviera más claramente relacionado con el comercio que la política sobre la competencia. Los tipos de prácticas anticompetitivas que se habían analizado en el Grupo de

Trabajo, incluyendo los cárteles internacionales, los cárteles de exportación y las prácticas de exclusión con alcance internacional, tenían evidentes efectos de distorsión en el comercio internacional, así como una repercusión perjudicial en el desarrollo; en consecuencia, resultaba un tanto extraño sugerir que la OMC, como organización internacional, no debiera interesarse por esas prácticas.

68. El representante del Japón dijo que la cuestión planteada por el Pakistán y otras delegaciones debía invertirse: es decir, la pregunta pertinente era *por qué no* la OMC. En otros ámbitos de Ginebra, la cooperación técnica, la cooperación horizontal, los intercambios de experiencias y la construcción de bases de datos eran las actividades más importantes de otras organizaciones internacionales. Aunque el punto fuerte de la OMC como institución residía en su carácter contractual y en su naturaleza de institución normativa, ello no suponía, ciertamente, que no le fuera posible absorber actividades más amplias de cooperación técnica como parte de su programa. Por el contrario, las actividades normativas y de cooperación técnica de la Organización se apoyaban recíprocamente y eran complementarias. El elemento de juicio más importante era que diversos países en desarrollo habían manifestado una necesidad urgente de mayor cooperación técnica y apoyo para la aplicación de leyes nacionales eficaces. A través de las reuniones del Grupo de Trabajo y seminarios regionales como los que se habían presentado en Phuket, y en contactos formales e informales con las autoridades en distintos países, el Japón estaba convencido de que un número importante de países apoyaba ya un criterio más positivo, aplicado por medios más imaginativos, respecto de las necesidades de esos países.

69. En cuanto a asegurar el necesario grado de flexibilidad en cualquier marco multilateral, los representantes de Hong Kong, China; la India; y el Pakistán dijeron que las deliberaciones del Grupo de Trabajo en sus reuniones anteriores habían puesto de relieve la necesidad de que en cualquier programa de trabajo multilateral sobre la competencia que se considerase necesario se prestara la debida atención a la diversidad y las asimetrías existentes en la situación económica de los Miembros, sus regímenes en materia de competencia, sus tradiciones jurídicas y su contexto cultural. No resultaba claro si la propuesta de Suiza (WT/WGTCP/W/151) había tenido en cuenta adecuadamente esa diversidad y esas asimetrías. En opinión de Hong Kong, China, la falta de sensibilidad respecto de las importantes diferencias entre los Miembros en estas materias perjudicaría gravemente la utilidad y la amplia aceptación de cualquier propuesta. El representante de Indonesia dijo que, si se resolvía considerar normas multilaterales sobre la política de competencia, sería indispensable que esas normas fuera suficientemente flexibles para que los países en desarrollo pudieran alcanzar sus objetivos de desarrollo. No debían imponerse a los países en desarrollo nuevas cargas. Incluso la cuestión de la notificación podía ser una tarea fácil para algunas delegaciones, pero era difícil para otras, como se manifestaba claramente en la experiencia respecto de diversas obligaciones derivadas de la Ronda Uruguay.

70. El representante de Corea, comentando el documento de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (WT/WGTCP/W/152), dijo que, aunque la flexibilidad en la aplicación de un eventual acuerdo multilateral sobre la política de competencia era esencial, no debía interpretarse el respeto de las circunstancias particulares de cada Miembro en el sentido de que los países podrían justificar, por ejemplo, la presencia de ciertos monopolios en sectores abarcados por los acuerdos porque tales monopolios correspondieran a su política de desarrollo económico.

71. El representante del Japón dijo que, en vista de la diversidad de los países en desarrollo y de su necesidad de desarrollo económico, el Japón deseaba que el marco multilateral propuesto tuviera la mayor flexibilidad posible. Como se indicó en el párrafo inicial de su comunicación sobre la cooperación en un marco multilateral (WT/WGTCP/W/156), esa flexibilidad debería aplicarse incluso en relación con los principios básicos incorporados en la propuesta de su país. La progresividad y el criterio gradual eran las condiciones previas. Los países en desarrollo parecían experimentar una real necesidad de cooperación por una parte, y al mismo tiempo cierta preocupación relacionada con el

establecimiento de un marco multilateral. Sin embargo, esas preocupaciones no debían exagerarse. Debían abordarse mediante una discusión más precisa, en términos concretos, sobre el trato especial y diferenciado de los países en desarrollo y el alcance del sistema de solución de diferencias de la OMC. El Japón estaba dispuesto a aplicar en las reuniones futuras un enfoque flexible también en estas materias, si así lo deseaban algunos de los países Miembros. Por ejemplo, tal vez debiera hacerse mayor hincapié en la propuesta desarrollada en el documento del Canadá (WT/WGTCP/W/155) sobre un método gradual respecto de la cooperación a nivel multilateral, mencionada también por Malasia. Según lo había interpretado el orador, la idea básica consistía en que, en la primera etapa, se promovería la difusión de leyes eficaces sobre la competencia mediante la cooperación técnica. En la segunda etapa, cuando los países Miembros ya hubieran establecido una legislación sobre la competencia, podría desarrollarse la asistencia técnica para el fomento de la capacidad. En la tercera etapa, si determinados países así lo deseaban, podría realizarse una cooperación voluntaria del tipo de la OCDE, incluyendo el intercambio de informaciones no confidenciales. Más allá de estas etapas, todo podría ser facultativo. Durante todo el proceso debería realizarse un intercambio de experiencias y un aprendizaje de prácticas. No parecía que existiera nada peligroso en este proceso.

72. El representante de Suiza dijo que en la propuesta de su delegación (WT/WGTCP/W/151) la necesidad de la flexibilidad había sido reconocida, en realidad, en cuanto se habían dejado libradas a la discrecionalidad de cada Miembro importantes cuestiones referentes a lo que deberían contener las leyes nacionales sobre la competencia. Sin embargo, sería útil un análisis más detenido de la mejor forma de abordar las necesidades específicas de los países en desarrollo en esa materia. El orador invitó a las delegaciones como la de Hong Kong, China, a que tomaran el modelo y analizaran en qué puntos y en qué medida consideraban, por ejemplo, que era necesario un trato especial y diferenciado teniendo en cuenta el alcance relativamente limitado de los elementos preceptivos que figuraban en el modelo suizo.

73. El representante del Pakistán dijo que hacía falta un análisis de costos y beneficios realizado individual y colectivamente para determinar si las ventajas que podían extraerse del desarrollo de un marco multilateral excedían o no de lo que se pedía a los Miembros que depusieran en el campo de la flexibilidad. El Pakistán no estaba convencido actualmente sobre esa cuestión. Lo que necesitaba su delegación era la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para fomentar las ramas de producción y los sectores siempre que se deseara. No se lograría tal cosa simplemente estipulando una lista de sectores que quedarían exentos, en el entendimiento de que todo lo demás quedaría incluido en el ámbito de las normas sobre la competencia.

74. El representante de las Comunidades Europeas y sus Estados miembros estuvo de acuerdo con la sugerencia del representante del Pakistán de que el Grupo de Trabajo efectuara un análisis de costos y beneficios. En última instancia existían, en lo fundamental, dos cuestiones que tendrían que abordarse en las deliberaciones futuras. La primera era toda la cuestión de las relaciones entre los eventuales principios comunes y el grado necesario de flexibilidad. En segundo lugar se planteaba la cuestión del tipo de modalidades de cooperación que resultaría útil en el plano multilateral. Esas dos cuestiones podían discutirse en forma concreta y específica, sin prejuzgar sobre las decisiones políticas de los países acerca del tema de la negociación de un marco multilateral.

75. El representante del Canadá recordó al Grupo de Trabajo que su país participaba en actividades de cooperación con diversos países que tenían regímenes considerablemente variados. El régimen del Canadá en materia de competencia era bastante distinto en algunos aspectos del de los Estados Unidos o el de la Comunidad Europea. Ello ponía de manifiesto que un compromiso de cooperación y de atenerse a determinados principios fundamentales no impedía una importante diversidad entre los regímenes en materia de competencia.

76. El representante de Hong Kong, China, dijo que su delegación recibía con gratitud las seguridades otorgadas por varias delegaciones en el sentido de que no habría una armonización de las leyes nacionales sobre la competencia y de que se respetaría la necesidad de flexibilidad y de aplicación gradual. Su delegación estaría aún más satisfecha si se precisara que no habría necesidad de establecer obligatoriamente leyes sobre la competencia. Leyendo entre líneas, el orador estimaba que era esa cuestión la que preocupaba a algunas delegaciones.

77. Los representantes del Pakistán y Túnez plantearon la cuestión de cómo podía conciliarse la soberanía y la independencia de las autoridades nacionales encargadas de la competencia con un acuerdo multilateral. El representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros respondió que los compromisos de un marco multilateral se referirían a la legislación y no a la forma en que la aplicarían las autoridades encargadas de la competencia. En consecuencia, ningún aspecto de esos compromisos limitaría la independencia de las autoridades encargadas de la competencia ni la discrecionalidad de esas autoridades en la determinación de los enjuiciamientos. El representante del Canadá afirmó que, según la experiencia de su país, un compromiso de cooperación no afectaba a la independencia de las autoridades encargadas de la competencia en el ejercicio de sus funciones de aplicación de las normas.

78. El representante de Hong Kong, China, preguntó qué fundamentos tenía la afirmación incluida en el documento del Japón (WT/WGTCP/W/156) de que se había alcanzado ya un grado considerable de consenso respecto de algunos elementos claves relativos a un marco multilateral sobre la política de competencia. En su respuesta, el representante del Japón dijo que eso no suponía negar la existencia de opiniones divergentes ni la importancia de esas diferencias. Por el contrario, un marco multilateral necesitaba ser comprensivo, y su delegación invitaba a las demás delegaciones a exponer del modo más directo posible sus preocupaciones concretas respecto de las propuestas actuales.

79. El representante de Malasia reiteró la posición de su delegación de que no hacían falta normas mundiales sobre la política en materia de competencia. Las propuestas formuladas no daban respuesta a varias de las preguntas, dudas e inquietudes que habían expresado Malasia y otros países en desarrollo en la reunión anterior del Grupo de Trabajo y que se habían resumido en la Nota del Presidente distribuida antes de la reunión en curso (documento sin signature N° 5696, distribuido el 21 de septiembre de 2000). El representante de Kenya dijo que su país apreciaba las ventajas que podían derivar de la política de competencia. Sin embargo, la idea de un acuerdo multilateral podía ser demasiado ambiciosa en este momento. El representante de Indonesia dijo que compartía las inquietudes expresadas por delegaciones como las de Malasia, el Pakistán y la India. Era difícil considerar normas multilaterales en esta esfera porque, en el caso de muchos países en desarrollo, tales normas podían exigir un reexamen, y eventualmente una reelaboración, de leyes aprobadas recientemente por los órganos legislativos. El orador observó, asimismo, que esos y otros países habían planteado diversas preocupaciones en las deliberaciones en curso en el Consejo General sobre las cuestiones relativas a la aplicación. Si esas cuestiones podían resolverse satisfactoriamente, Indonesia tal vez estuviera en condiciones de volver a considerar la política de competencia con espíritu abierto.

80. El representante del Japón afirmó que la posición de su delegación tenía importantes elementos en común con las opiniones expresadas dos semanas antes, en una conferencia celebrada en Bruselas, por el Fiscal General Adjunto para Asuntos Antimonopolio saliente de los Estados Unidos, Sr. Joel Klein. En su respuesta, el representante de los Estados Unidos dijo que algunos de los informes de prensa sobre el discurso del Sr. Klein eran erróneos, al menos en ciertos aspectos. Lo que había dicho el Sr. Klein, y que seguía constituyendo la posición de los Estados Unidos, era, por una parte, que existían diversas cuestiones prácticas importantes en materia de política internacional sobre la competencia que era preciso abordar. Mientras que, en algunos casos, la mejor forma de abordar esas cuestiones era en el plano bilateral, en otros era en el plano regional o, en algunos casos, en el

multilateral. Sin embargo, no habían madurado todavía las condiciones para la negociación de normas obligatorias en materia de aplicación del derecho de la competencia. En esta situación, el Sr. Klein había sugerido la necesidad de proponer un ámbito adecuado para resolver algunos de los problemas prácticos más apremiantes, especialmente en la esfera de las fusiones. En cuanto a cuál debería ser exactamente ese ámbito, desde el punto de vista de los Estados Unidos tal cosa no se había determinado todavía. Sin embargo, los Estados Unidos consideraban que la estructura debía ser amplia, con inclusión de representantes de la OMC, la OCDE, la UNCTAD y el Banco Mundial.

81. El representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros dijo que, aunque reconocía que subsistían discrepancias en el Grupo de Trabajo sobre algunos puntos fundamentales, sería sorprendente que no existiera un amplio grado de consenso entre sus integrantes sobre diversas cuestiones analíticas, como la contribución que podía hacer la política en materia de competencia a un desarrollo económico sano, o los efectos perjudiciales de las diversas prácticas anticompetitivas que se habían mencionado en los documentos de su delegación y de otras delegaciones. También parecía contar con amplio apoyo la opinión de que hacía falta una cooperación internacional para hacer frente a las prácticas anticompetitivas que tenían alcance internacional, aunque el orador reconocía que no estaban resueltos todos los problemas en cuanto a la determinación de los elementos que sería más útil abordar en los planos bilateral, regional y multilateral. Sin embargo, un número importante y cada vez mayor de Miembros parecían haber llegado a la conclusión de que, aunque los métodos bilaterales y regionales eran útiles, no ofrecían todas las respuestas y hacía falta dar a la cooperación un aspecto multilateral. Esto se reflejaba, por ejemplo, en la resolución adoptada en la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre el conjunto de principios y normas, así como en diversas intervenciones efectuadas en el Grupo de Trabajo. A pesar de estos indicios de una coincidencia de opiniones cada vez mayor, el orador reconocía la importancia de abordar las inquietudes que algunas delegaciones seguían manifestando.

82. Otro representante de los Estados Unidos dijo que estaba de acuerdo con la observación del representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros de que el propósito del Grupo de Trabajo era examinar los aspectos analíticos de los problemas, dejando las cuestiones políticas, como la referente a si correspondía entablar negociaciones, para que se resolvieran en otros ámbitos. De cualquier modo, la posición de los Estados Unidos seguía siendo que la relación entre la política comercial y la política de competencia era un tema de importancia cada vez mayor para la OMC, para el sistema multilateral de comercio y para el futuro del comercio internacional. No obstante, la cuestión de si la OMC era o no la institución apropiada para iniciar el desarrollo de normas sobre la competencia en un contexto multilateral era un tema aún no resuelto. Por otra parte, actualmente era prematuro tratar de responder esa pregunta. Las comunicaciones presentadas por los Estados Unidos durante el año, conforme al mandato orientador incluido en la Declaración Ministerial de Singapur, indicaban que su delegación había procurado seguir haciendo hincapié, no en la discusión política, sino en la forma en que el Grupo de Trabajo podría examinar de manera gradual, constructiva y práctica las diversas cuestiones planteadas en el tema y contribuir a fomentar y difundir la cultura de la competencia. Esto tenía una importancia evidente para los países en desarrollo y con economía en transición que estuvieran considerando la posibilidad de dictar leyes o establecer políticas sobre la competencia o, si ya habían efectuado esa opción, abordando los problemas prácticos derivados de la aplicación de esas leyes o políticas. No obstante, era evidente que gran parte de las deliberaciones del Grupo de Trabajo se habían referido a la cuestión del provecho que podría obtenerse mediante un marco o un acuerdo sobre la política de competencia en la OMC y si era preciso o no un marco o un acuerdo para lograr esas ventajas. Se habían dicho muchas cosas sobre el valor de la transparencia, la cooperación internacional y la asistencia técnica, mucho de lo cual era válido. Tal vez fuera cierto que, a cierta altura del desarrollo del tema, un acuerdo o marco de alguna clase pudiera ser la forma adecuada para la cuestión. No obstante, a la delegación de los Estados Unidos no le resultaba claro que así ocurriera, ni que el Grupo de Trabajo hubiera llegado ya a una altura que le permitiese efectuar una apreciación debidamente fundada acerca de la cuestión. Los Estados Unidos se planteaban preguntas legítimas que era preciso dilucidar acerca de la forma en que podría ponerse en

práctica la colaboración internacional en el plano de la OMC en el contexto jurídico que presentaba el derecho de la competencia. En último análisis, lo importante no era apresurarse en la concertación de un acuerdo, sino determinar si podrían tomarse medidas, como la comunicación de experiencias y la convergencia de ideas, que pudieran servir de base para un eventual acuerdo desarrollado de manera que permitiese una opción fundada respecto de la conveniencia de un acuerdo y, en caso afirmativo, sobre su naturaleza y su ubicación institucional.

83. El representante del Japón dijo que la competencia no debería constituir un tema que dividiera a los Miembros de la OMC. Todos los Miembros de la OMC favorecían la economía de mercado y apreciaban la competencia. La cuestión de la competencia no sólo representaba un tema central para la comunidad de la OMC, sino que estaba en su médula misma. Nunca había sido un tema exótico para la OMC. Por lo tanto, en lo referente a los temas de la competencia los Miembros deberían evitar el criterio de una brecha divisoria entre el Norte y el Sur, si existía tal cosa. La cuestión de la competencia era claramente distinta de otros temas debatidos en otros ámbitos de la OMC, en cuanto ofrecía un campo de acción sin perdedores que beneficiaría a todos los países participantes. El representante de Hong Kong, China, dijo que no era propósito de su delegación poner de relieve ninguna brecha entre el Norte y el Sur. Era un hecho objetivo que un número importante de Miembros no había convenido todavía en la negociación de un marco multilateral sobre la política de competencia en la OMC.

84. Con respecto a las medidas gubernamentales que afectaban al comercio y la competencia, los representantes de la India; el Pakistán; Hong Kong, China; Corea; Malasia; Indonesia; y Filipinas dijeron que una parte importante del mandato del Grupo de Trabajo consistía en tratar esas medidas. Esto incluiría en primer lugar las prácticas anticompetitivas que, en opinión de esas delegaciones, estaban incorporadas en acuerdos vigentes de la Ronda Uruguay, como el Acuerdo Antidumping, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y el Acuerdo sobre Subvenciones. Todos los Acuerdos de la OMC deberían examinarse para determinar si fomentaban la competencia, con sujeción al principio de no establecer ninguna exclusión *a priori*. El representante del Japón dijo que su país compartía hasta cierto punto un interés común respecto de estas cuestiones, pero estimaba también que su examen no debía ir en desmedro de las cuestiones referentes a las prácticas anticompetitivas de las empresas ni de la necesidad de un marco multilateral sobre la política en materia de competencia. El representante de Suiza dijo que su país no aplicaba medidas comerciales como las medidas antidumping o compensatorias. No obstante, Suiza consideraba que la aplicación de medidas comerciales era un tema que podría discutirse en el Grupo de Trabajo en el futuro.

85. Con respecto a la labor futura del Grupo de Trabajo, la representante de Trinidad y Tabago sugirió que los Miembros necesitaban más tiempo para reflexionar sobre toda la cuestión de la relación entre política de competencia y desarrollo. La discusión había sido constructiva, pero quedaban muchas preguntas por responder. El representante de la India, refiriéndose al documento presentado por Hong Kong, China, en la reunión anterior del Grupo de Trabajo (WT/WGTCP/W/141), recordó que había sugerido un plan en tres etapas para la labor futura del Grupo. En lo referente a la primera etapa (es decir, el acuerdo sobre el alcance de la política de competencia), exigía una deliberación mucho más completa. Con respecto a la segunda etapa propuesta por Hong Kong, China, es decir, la determinación de los problemas que ofrecían interés en un mercado mundializado, no cabía duda de que se planteaban problemas, aunque el análisis ciertamente no había sido exhaustivo. Con respecto a la tercera etapa, es decir, el estudio de la viabilidad y el contenido de las posibles opciones multilaterales, la India tenía un punto de vista levemente diferente del adoptado al respecto por el Pakistán. Es decir, para la India, como delegación, resultaría difícil participar activamente en una deliberación sobre el contenido de un marco multilateral hasta que el Grupo de Trabajo hubiera llegado efectivamente a la tercera etapa. En consecuencia, las tres etapas indicadas por Hong Kong, China, deberían analizarse paso a paso. El orador añadió que el documento presentado por Corea (WT/WGTCP/W/154) había planteado tres

preguntas que permitirían agregar contenido a la discusión y concentrarla mejor: en primer lugar, si la OMC era o no el órgano adecuado para abordar los problemas que se habían identificado; en segundo término, si las actuales normas de la OMC podían ofrecer "indicadores" sobre las reformas necesarias; y en tercer lugar, un examen sistemático de la viabilidad de las posibilidades pertinentes en el plano multilateral. Esto comprendería el examen de las posibles opciones distintas de la creación de normas. En realidad, el documento de Corea ofrecía ejemplos útiles de actividades que podrían desarrollarse en relación con el fomento de la capacidad, el establecimiento de un mecanismo de examen de la política de competencia y una cooperación más estrecha entre la OMC y otros foros internacionales. Además, aunque existían todavía discrepancias sobre la creación de normas o tal vez no hubiera llegado aún el momento adecuado para examinar esa cuestión, ello no impedía a los Miembros comenzar medidas respecto de las diversas propuestas. Esto podría constituir tal vez un paso intermedio muy importante para facilitar la convergencia de puntos de vista cuando se examinase la posibilidad de normas multilaterales. Por último, la India tendía a coincidir con la propuesta formulada antes por Australia sobre la conveniencia de un trabajo de análisis, en forma de un estudio destinado a establecer las similitudes y las diferencias entre los criterios de los Miembros respecto de la política y la práctica sobre la competencia. Esa labor podría cumplirse por el propio Grupo de Trabajo o por la Secretaría.

86. El representante de Hong Kong, China, comentando el documento de Corea (WT/WGTCP/W/154) expresó su gratitud por el reconocimiento manifestado por el plan en tres etapas presentado por su delegación para la labor futura del Grupo de Trabajo. Hong Kong, China, estaba de acuerdo con Corea en que merecía una deliberación más completa del Grupo de Trabajo la determinación de las normas y directrices adecuadas para establecer las cuestiones relativas a la competencia que tenían pertinencia directa respecto del comercio internacional y el cumplimiento de los objetivos de la OMC. Teniendo en cuenta los cometidos de la OMC y el mandato del Grupo de Trabajo, Hong Kong, China, veía con interés la idea de que los Miembros establecieran colectivamente criterios que sirvieran de base para la determinación de los problemas planteados. Su delegación había propuesto dos criterios de esa clase: en primer lugar, la existencia de efectos anticompetitivos significativos y demostrables sobre el comercio internacional y las inversiones; y, en segundo lugar, la índole general de una práctica anticompetitiva entre los Miembros de la OMC. Las cuestiones correspondientes a las etapas segunda y tercera del plan propuesto estaban en la médula de lo planteado en el documento de Corea y en algunas otras comunicaciones. Aunque la primera etapa no había suscitado todavía muchas discusiones, no debía subestimarse su importancia. Teniendo en cuenta la amplitud y variedad de los significados, las expectativas y las prioridades que los Miembros asignaban a la expresión "política de competencia" y a sus variaciones en el contexto internacional, Hong Kong, China, estaba convencida de que la realización de investigaciones y deliberaciones más completas sobre la primera etapa ayudaría a sentar bases sólidas para que los Miembros forjaran un consenso paso a paso. A este respecto, su delegación había reflexionado más detenidamente sobre la mejor forma de organizar la labor del Grupo de Trabajo respecto de la primera etapa y proponía que se examinaran con carácter prioritario las siguientes cuestiones: la medida en que existía una terminología internacionalmente aceptada sobre el alcance de la expresión "política de competencia"; cuáles eran los elementos comunes de las diferentes corrientes de definiciones de la expresión; si las diversas corrientes de definiciones indicaban o no la existencia de aspectos caracterizados por una dicotomía de puntos de vista y, en caso afirmativo, cuáles eran los elementos conceptuales necesarios para abordar esa dicotomía. También serían convenientes deliberaciones más profundas sobre cada uno de los elementos del plan en tres etapas. El representante de Indonesia estuvo de acuerdo en la conveniencia de un análisis más completo de la definición de la política de competencia.

87. Los representantes del Japón, Corea, Malasia y el Pakistán dijeron que podría ser conveniente que el Grupo de Trabajo concentrara su atención en los puntos planteados por el Presidente en la lista de preguntas distribuida antes de la sesión en curso (documento sin signature N° 5696, distribuido el 21 de septiembre de 2000). Con ello se garantizaría que la deliberación se concentrara en problemas

más sustanciales, exploratorios y prácticos. El representante de Corea sugirió que esas cuestiones podrían examinarse junto con otros temas y asuntos planteados para su examen en el documento del Japón (WT/WGTCP/W/156), como la armonización de los procedimientos referentes a las fusiones internacionales, la prohibición de los cárteles de exportación y el manejo de la información confidencial. También merecían que el Grupo de Trabajo los examinara otros temas planteados en el documento de Suiza (WT/WGTCP/W/151) acerca de las posibles contradicciones con la política industrial, las contradicciones con la política de inversiones y la mayor necesidad de trato especial y diferenciado para los países en desarrollo. El representante de Hong Kong, China, comentando el documento de Suiza (WT/WGTCP/W/151), dijo que las cuestiones planteadas acerca de la política de desarrollo en los párrafos finales de ese documento merecían un estudio y una deliberación detallados. A juicio de Hong Kong, China, establecer un plan de acción multilateral antes del examen de esas cuestiones significaría poner la carreta delante de los bueyes.

88. El representante de Túnez dijo que los criterios de prioridad para la labor futura podrían referirse a la determinación de las prácticas anticompetitivas más perjudiciales y el establecimiento de una base de datos común. También era preciso examinar la cuestión de las excepciones y las posibles relaciones con cualquier arbitraje que pudiera plantearse entre el derecho y la política sobre la competencia y otras esferas del derecho y la política. Deberían examinarse igualmente los costos del cumplimiento para las empresas y la repercusión en las inversiones.

89. El representante del Pakistán dijo que al sugerir la necesidad de una discusión mejor orientada sobre algunos de los temas y cuestiones que se habían planteado no había querido decir que el Grupo de Trabajo tuviera que elaborar toda una lista de nuevas cuestiones y entrar en una puja de procedimiento sobre lo que correspondía debatir. Las cuestiones pertinentes podrían abordarse sin duda dentro del programa amplio actual. En particular, ello podría realizarse siguiendo la tradición de formular las preguntas que los Miembros desearan plantear y de que las deliberaciones se organizaran a continuación de tal modo que cada una de esas preguntas pudiera recibir, eventualmente, una atención más especial. El representante de los Estados Unidos estuvo de acuerdo en que el mandato con que actuaba el Grupo de Trabajo era suficientemente flexible para permitirle estudiar todas las cuestiones de interés para las delegaciones. Las preguntas que la Presidencia había resumido desde la última reunión del Grupo de Trabajo habían ayudado indudablemente a informar a todas las delegaciones y contribuían en cierto grado a concentrar las deliberaciones. Sin embargo, correspondía a las delegaciones tratar los temas de su interés.

90. El representante de Hong Kong, China, dijo que la lista revisada de preguntas que se había alentado al Presidente a preparar podría organizarse de modo que permitiera a los Miembros distinguir las cuestiones más fundamentales de las que dependían de éstas. Ese tipo de estructura ayudaría a los Miembros a contar con una exposición más precisa del estado actual de las deliberaciones y a contribuir más útilmente a ellas. El Presidente dijo que examinaría la propuesta, pero le preocupaba la posibilidad de imponer su propio criterio subjetivo acerca de lo que era fundamental y lo que no lo era.

91. El representante de los Estados Unidos, comentando la contribución de Suiza, dijo que el documento había planteado la existencia de un interés mutuo mayor de todos los países en el fomento de la estabilidad de los mercados de todo el mundo. A juicio de la delegación del orador, no debía equipararse la competencia con la estabilidad; en realidad, era la antítesis de la estabilidad. Los cárteles, que procuraban promover la estabilidad, eran claramente un elemento negativo desde el punto de vista de la política de competencia. El representante de Suiza respondió que el comentario del representante de los Estados Unidos era perfectamente acertado. El orador no se había referido a la estabilidad de determinados mercados, sino a la estabilidad de la economía de mercado a largo plazo. Adoptando esa perspectiva resultaba claro que la política de competencia, al promover la eficiencia y la reestructuración permanente de la economía respondiendo a las fuerzas del mercado, favorecería a largo plazo la estabilidad general de la economía.

92. El representante de Kenya dijo que, en el momento actual, lo prioritario para los países en desarrollo podía no consistir en tratar las cuestiones multilaterales de la política de competencia. Actualmente otras cuestiones, como la desocupación y el acceso a los servicios de salud, planteaban problemas más apremiantes. El representante de Malasia propuso examinar la posibilidad de transferir a la UNCTAD la labor del Grupo de Trabajo sobre el tema de las prácticas anticompetitivas, pues era un órgano especializado en ese tema. Los representantes de la India y el Pakistán dijeron que podría ser conveniente estudiar esa propuesta.

93. Un representante de la Secretaría dijo que se celebraría en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), probablemente en febrero de 2000, un seminario regional para Miembros y observadores de África, análogo al que se había llevado a cabo en Phuket (Tailandia) para Miembros y observadores asiáticos. La Secretaría estudiaría la posibilidad de organizar otro seminario para América Latina y el Caribe si ello interesaba a los Miembros. Los representantes de Trinidad y Tabago acogieron con satisfacción la posibilidad mencionada de celebrar, oportunamente, un seminario o curso práctico para la región del Caribe. La representante de Guatemala dijo que, aunque su país no tenía aún un régimen en materia de competencia, se habían llevado a cabo a ese respecto importantes trabajos preparatorios. Su delegación estaba de acuerdo en que los regímenes en materia de competencia se beneficiarían de la adopción de principios fundamentales de la OMC como la transparencia, el trato nacional y la no discriminación. También coincidió con la delegación del Canadá en que la cooperación y la asistencia técnica eran procesos diferentes. Guatemala se apoyaba en la asistencia internacional para establecer su régimen en materia de competencia y le interesaría recibir un seminario regional sobre la política de competencia como el organizado recientemente por la OMC en Tailandia.

94. El Presidente expuso sus reflexiones personales acerca de la deliberación desarrollada sobre el tema II del programa. Señaló, en particular, los siguientes puntos a cuyo respecto destacó que sólo eran impresiones personales sin ningún carácter oficial:

- La deliberación había comenzado con la exposición de varias contribuciones en que se estudiaban en detalle posibles aspectos de un marco multilateral sobre la política de competencia. Aunque esas propuestas contenían algunos elementos comunes, entre ellos principios básicos, modalidades de cooperación y medidas para fomentar la cooperación técnica y la creación de instituciones, también se habían manifestado diversas diferencias en cuanto a la importancia asignada a cada tema. Respondiendo a preocupaciones planteadas en reuniones anteriores del Grupo de Trabajo, en varias de las propuestas se había hecho hincapié en que la armonización de las leyes nacionales sobre la competencia no se exigiría como condición previa para la participación en un marco multilateral. También se había mencionado que podrían existir exenciones, siempre que fueran transparentes.
- Algunas delegaciones habían sugerido que uno de los beneficios importantes de un acuerdo multilateral sería la intensificación de la cooperación entre las autoridades encargadas de la competencia y la posibilidad de ocuparse de prácticas que, de otro modo, "se escurrirían entre las grietas" existentes entre los regímenes nacionales y los acuerdos bilaterales o regionales en materia de competencia.
- Una delegación planteó la posibilidad de que se hubieran subestimado las ventajas de los acuerdos bilaterales y regionales y, acaso, se hubieran sobrevalorado los beneficios de un acuerdo multilateral. Aunque las respuestas dadas a esta pregunta habían tenido aspectos variados, un representante había sugerido que una limitación fundamental de los acuerdos bilaterales y regionales era su alcance restringido, tanto respecto de sus participantes como de los territorios geográficos. También se había planteado que el valor del marco multilateral no residiría tanto en las disposiciones concretas que contuviera en materia de cooperación sino, tal vez, en el simple hecho

de que se definirían principios básicos comunes y se contaría con un acuerdo general que daría incentivos a las autoridades encargadas de la competencia para colaborar más intensamente que en la actualidad.

- Otro punto que fue destacado por algunas delegaciones proponentes de un marco multilateral había sido que la cooperación sobre casos concretos debía seguir siendo de carácter esencialmente voluntario. En otras palabras, parecía que, en el marco multilateral propuesto por algunos Miembros, existiría un compromiso de cooperación análogo al incluido en las disposiciones sobre cooperación que algunos países ya tenían en el plano bilateral pero que, del mismo modo que en esos acuerdos, los países en última instancia no estarían obligados a cooperar si ello se oponía a sus intereses de importancia. Esto se había considerado una aclaración importante, por lo menos desde el punto de vista de un Miembro que hasta ese momento había manifestado escepticismo sobre la conveniencia de un marco multilateral de cooperación en esta materia.
- Algunos representantes también habían planteado la probabilidad de que se desatendieran los intereses de los países en desarrollo si la cooperación sólo se llevaba a cabo en el plano bilateral y que, desde ese punto de vista, un acuerdo multilateral de cooperación podría ser un medio útil para asegurar que los países en desarrollo obtuvieran las ventajas de la cooperación. Además, se mencionó el hecho de que un marco multilateral podría reducir el costo de las transacciones para las empresas, y que este aspecto no carecía de importancia.
- Se había planteado una pregunta, que pareció ser de interés para numerosos representantes, acerca de si un marco multilateral podría o no reducir las posibilidades de los países en cuanto a otorgar subvenciones como instrumento de su política industrial. En respuesta a esa pregunta, uno de los principales proponentes de ese marco había declarado que tal cosa ciertamente no ocurriría.
- Diversos representantes habían preguntado si existían o no otros medios para alcanzar los beneficios que se contemplaba lograr mediante el marco multilateral propuesto. Por ejemplo, se sugirió la posibilidad de alcanzar los beneficios deseados a través de mecanismos como los exámenes por las demás partes, la asistencia técnica y la creación de instituciones y otras medidas fuera del marco de un acuerdo multilateral. Esos representantes consideraron que, como mínimo, era importante examinar tal posibilidad.
- A pesar de las aclaraciones aparentemente útiles que se proporcionaron sobre las cuestiones mencionadas y otras, varias delegaciones habían hecho hincapié en que, antes de que pudiera evaluarse adecuadamente la conveniencia del marco multilateral propuesto, seguía siendo necesario aclarar las consecuencias concretas, por ejemplo, de las propuestas que se habían formulado sobre principios básicos, así como sobre la cooperación.
- También se efectuaron varias contribuciones correspondientes al segundo aspecto de este tema del programa, relativo a la relación entre la competencia y el desarrollo económico. Sobre el tema de la competencia y el desarrollo económico, el Grupo de Trabajo recibió información de un país que recientemente había adoptado una ley sobre la competencia y que había explicado los motivos por los que consideraba que la legislación sobre la competencia era necesaria para proteger las oportunidades de las empresas en cuanto a obtener acceso a los mercados y también para protegerlas una vez que hubieran obtenido el acceso a ellos.

- El Grupo de Trabajo recibió un interesante informe sobre la labor desarrollada en la Cuarta Conferencia de Examen de la UNCTAD. Se había señalado que la resolución convenida en esa Conferencia había reafirmado la fundamental función del derecho y la política de la competencia para un sano desarrollo económico. Además, entre muchos otros aspectos de gran interés, había invitado a la UNCTAD a contribuir al desarrollo de acuerdos internacionales sobre la política de competencia, incluso a nivel multilateral. Las informaciones suministradas por el representante de la OCDE acerca de la labor de la Organización en relación con los cárteles intrínsecamente nocivos también habían parecido de interés para las deliberaciones del Grupo de Trabajo.
- Se habían analizado diversas propuestas sobre la estructuración de la labor futura del Grupo de Trabajo. Se había propuesto que el Presidente examinase la posibilidad de revisar y actualizar el conjunto de preguntas que se había distribuido antes de la reunión. También se había argumentado que, en última instancia, correspondía a los Miembros plantear las cuestiones que les interesaran y que el mandato del Grupo de Trabajo era suficientemente amplio para abarcar las diversas inquietudes formuladas.
- Otros representantes habían sugerido la importancia de prestar más atención en el Grupo de Trabajo a las medidas gubernamentales que tenían repercusión en el comercio y la competencia.
- Por último, varios representantes habían sugerido que no era útil que el Grupo de Trabajo se dedicara a esta altura a negociaciones políticas. Era preferible que continuara concentrando su labor en el proceso orientador y analítico. Se reconoció, sin embargo, que como parte de ese proceso era pertinente seguir estudiando las ventajas y los inconvenientes de eventuales modalidades de un acuerdo multilateral, así como otras posibles formas de abordar los diversos problemas que se habían determinado.

Por último, el Presidente se comprometió a distribuir, oportunamente, una lista actualizada de preguntas planteadas por los Miembros.

III. LA CONTRIBUCIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA OMC, INCLUIDA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL

95. El representante de los Estados Unidos, al presentar el documento WT/WGTCP/W/153, dijo que en él se analizaba la función de la promoción de la competencia. La importancia de este tema correspondía al hecho de que, además de las restricciones privadas como las impuestas por los cárteles, también podían surgir restricciones de la competencia de limitaciones injustificadas incluidas en leyes, reglamentos y políticas. Esas restricciones muchas veces quedarían fuera del ámbito de aplicación de la legislación antimonopolística, pero estarían abiertas a los esfuerzos de promoción de los organismos encargados de la competencia para eliminar o atenuar sus efectos anticompetitivos. En los Estados Unidos, la promoción de la competencia era parte de las funciones del Departamento de Justicia (División Antimonopolios) y también de la Comisión Federal de Comercio. Los programas de promoción cumplidos por los organismos tenían por objetivo representar los intereses del consumidor evitando la adopción de restricciones que pudieran reducir la competencia y el bienestar del consumidor. Por ejemplo, en general los organismos instaban a que las reglamentaciones contuvieran el mínimo posible de restricciones de la competencia. En el documento se presentaban diversos ejemplos de actividades de promoción cumplidas en los planos del Gobierno federal, los gobiernos de los Estados y las administraciones locales y con referencia a diversas formas de intervención oficial en los mercados de distintos servicios y productos. A diferencia de algunos

países, en los Estados Unidos las leyes pertinentes no establecían facultades específicas en materia de promoción de la competencia, sino que esas facultades se consideraban implícitas en las normas legales. Además, algunas otras leyes disponían expresamente la participación de los organismos antimonopolios en los procedimientos respectivos.

96. El orador dijo a continuación que la promoción de la competencia podía efectuarse de manera formal o informal. La labor de promoción formal suponía la presentación de observaciones escritas, incluyendo estudios especializados y la presentación de testimonios orales. Los métodos informales incluían las discusiones con legisladores y sus asesores o entre los funcionarios de los organismos encargados de la competencia y los organismos de reglamentación. El orador señaló, asimismo, que la función de la promoción de la competencia podía ser de especial importancia en los países en que se llevaba a cabo una transición a la economía de mercado, en que normalmente existiría una importante actividad de privatización. En ese contexto, la promoción era fundamental para asegurar que los monopolios públicos no se transformasen simplemente en monopolios privados y que las reglamentaciones indispensables fomentaran el bienestar público incorporando los principios de la competencia. Con respecto a las propuestas de acentuar la eficacia de la labor de promoción, un requisito para ello era que los procedimientos fuesen transparentes y que los organismos participantes recibieran aviso con suficiente anticipación de las decisiones que habrían de adoptarse para efectuar los preparativos necesarios. También era útil que las respectivas audiencias se celebraran abiertas al público para que pudiera divulgarse ampliamente la posición defendida por el organismo encargado de la competencia. Sería útil, desde luego, que la función de promoción a cargo del organismo se estipulara en la ley aunque, como se había señalado, no ocurría tal cosa en los Estados Unidos. Se había considerado útil que el organismo encargado de la competencia tuviera acceso a conocimientos técnicos especializados, que actuase con cuidado en la elección de sus objetivos prioritarios, que se fijara metas realistas y que participara en la medida posible en forma no controversial, adoptando el método de informar a los dirigentes de los costos que podrían generar las recomendaciones mal encaminadas y de los beneficios que el consumidor podría obtener de las políticas que favorecen la competencia. Por último, la promoción debía tener el respaldo de una aplicación eficaz de las normas sobre la competencia como parte de un régimen general en esa materia.

97. El representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, comentando la comunicación de los Estados Unidos, dijo que ofrecía numerosas ideas valiosas sobre el importante papel que podía desempeñar la promoción de la competencia para lograr un funcionamiento eficiente y competitivo de los mercados. La promoción de la competencia también era un elemento importante de la política de competencia de la Comunidad Europea. Como ejemplo de tal actividad, se examinaban las propuestas comunitarias provenientes de la Comisión y dirigidas al Consejo y, cuando procedía, se hacían las contribuciones necesarias para asegurar que fuesen compatibles con los objetivos de la política de competencia consagrados en el Tratado constitutivo de las CE. El orador señaló también que existía un sistema de vigilancia aplicable a las ayudas estatales a las ramas de producción que pudieran ser perjudiciales para la competencia.

98. El representante del Canadá, comentando también la comunicación de los Estados Unidos, dijo que desde el punto de vista del Canadá el documento había sido valioso al poner de relieve la forma en que las autoridades encargadas de la competencia podían relacionarse en forma útil con los encargados de la reglamentación del sector. Las opiniones expuestas eran sumamente complementarias de las formuladas en la comunicación del Canadá en la reunión precedente del Grupo de Trabajo (WT/WGTCP/W/146). El orador señaló también que diversas delegaciones de países en desarrollo habían hecho hincapié, en la Cuarta Conferencia de Examen, celebrada la semana anterior en la UNCTAD, en los problemas planteados por la relación entre las autoridades encargadas de la competencia y las encargadas de la reglamentación de los sectores. Esto parecería destacar la pertinencia de los argumentos expuestos en la comunicación de los Estados Unidos para los países en desarrollo. El representante de los Estados Unidos también había mencionado que en el presupuesto de los organismos de los Estados Unidos encargados de la competencia sólo una pequeña parte del

presupuesto estaba destinada a las actividades de promoción, cosa que ciertamente ocurría también en el Canadá. Sobre esta base cabría pensar que esas actividades representaban un lujo para los organismos encargados de la competencia recién creados. Sin embargo, la experiencia del Canadá indicaba que esas actividades distaban mucho de constituir un lujo y, en realidad, eran un instrumento de gran utilidad para fomentar un entorno eficiente y competitivo.

99. El representante de Suiza, comentando la misma comunicación, dijo que ofrecía gran cantidad de propuestas e ideas útiles. Las actividades de promoción de la competencia cumplidas por la autoridad encargada de esa materia también habían demostrado ser muy útiles en Suiza, por ejemplo, para tratar las disposiciones anticompetitivas en el sector de los servicios sanitarios.

IV. OTRAS CUESTIONES PLANTEADAS POR LOS MIEMBROS EN RELACIÓN CON EL MANDATO DEL GRUPO DE ESTUDIAR LA INTERACCIÓN ENTRE COMERCIO Y POLÍTICA DE COMPETENCIA

100. El Presidente señaló que, en la reunión celebrada en junio por el Grupo de Trabajo, la Secretaría se había comprometido a revisar la reseña de la legislación nacional de los Miembros en materia de competencia (WT/WGTCP/W/128/Rev.1) para incorporar una contribución recibida del Paraguay. Sin embargo, parecía que continuaban las consultas con la Misión del Paraguay acerca del alcance de la legislación paraguaya y su ubicación en el cuadro. De cualquier modo, la Secretaría se proponía ahora preparar una nueva versión del documento para tener en cuenta las comunicaciones recibidas de Tailandia y Croacia y otras adiciones que correspondiera incorporar.

V. SOLICITUDES DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES INTERNACIONALES DE QUE SE LES RECONOZCA LA CONDICIÓN DE OBSERVADORAS

101. El Grupo de Trabajo acordó volver a ocuparse en su reunión siguiente de las peticiones hechas por el SELA, la Organización de la Conferencia Islámica y el South Centre, teniendo en cuenta las consultas en marcha sobre cuestiones conexas en el marco del Consejo General.

VI. OTROS ASUNTOS

102. Con respecto a la naturaleza y el proceso de preparación del informe del Grupo de Trabajo al Consejo General sobre sus actividades cumplidas en 2000, el Presidente propuso, y el Grupo de Trabajo acordó, que se pidiera a la Secretaría que preparase un proyecto de informe del tipo que había elaborado al final de 1998 (WT/WGTCP/2) y 1999 (WT/WGTCP/3). El Grupo de Trabajo también acordó celebrar una breve reunión el 21 de noviembre con el fin de examinar y aprobar el proyecto de informe. En esa reunión, el Grupo de Trabajo examinaría también el programa de sus reuniones para el año 2001.
